

APUNTES A LA LEI
DE
ORGANIZACION I ATRIBUCIONES
DE LOS TRIBUNALES

(Sobre la base de las explicaciones en la clase
de D. Miguel Luis Valdes)

POR
OSVALDO LABARCA F.



Librería de Juan Nascimento

Ahumada N.º 265

SANTIAGO

1915



**PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO**

DEDICATORIA

A

Don Miguel Luis Valdes



Os dedico estas pocas pájinas en que he vertido la cosecha de vuestras inimitables esplicaciones, tal cual las hice para mi sola satisfaccion i mi solo estudio.

Sorpresivamente, sin disponer de tiempo ni para el mas lijero retoque, han venido a recibir esta impresion—bien es cierto, familiar i de casa—así en estado naciente.

Os ruego me perdoneis los errores i faltas de que serán copiosas, por esta circunstancia asi como por el significado que he querido dar a este modesto testimonio: de intensa gratitud hácia el esclarecido maestro que ha avivado en mí el amor al estudio i de profunda admiracion por el raro talento con que penetrais la verdadera condicion del alumno para hacer de nuestra clase la mas interesante i fecunda de la Universidad.

O. L. F.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO



INTRODUCCION

DERECHO PROCESAL es el conjunto de reglas que rijen el procedimiento judicial. Comprende ademas i estudia en primer lugar las que organizan i fijan las atribuciones de los Tribunales.

El estudio de la organizacion del poder judicial, la indicacion de su personal, las cualidades necesarias para su nombramiento, el modo de hacer estos nombramientos, etc., es importantísimo i previo al procedimiento mismo.

Antes de saber cómo se ejercita una accion es preciso saber ante quién debe ejercitarse (Art. 105 de la Const. i Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales de 1875.)

Breve reseña histórica.—En 1863 el Gobierno nombró a don Francisco Vargas Fontecilla para que redactase un proyecto de lei de organizacion i atribuciones de los



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
VALPARAISO

Tribunales. Un año despues lo presentó, 1864. Se nombró, entónces, una comision de 8 jurisconsultos para revisarlo, comision que terminó sus trabajos en Mayo de 1874. De sus primeros trabajos no hai actas ni ningun antecedente; las primeras actas son del año 1869, que se encuentran inéditas en el Archivo del Ministerio de Justicia. El mismo año 74 se presentó al Congreso i fué promulgada el 15 de Octubre de 1875.

Principió a rejir el 1.º de Marzo del 76.

Esta Lei de Organizacion i Atribuciones de los Tribunales no es un cuerpo completo; muchas otras disposiciones pertinentes se encuentran en otros cuerpos de leyes; en la Constitucion, en el Código Civil, en el de Comercio. Esta lei ha sido mui modificada, sobre todo, en lo relativo al nombramiento de jueces, estension de Tribunales, etc.

Por este gran número de modificaciones i para armonizar esta lei con los nuevos códigos de procedimientto, se ha elaborado un nuevo proyecto de código orgánico de Tribunales, proyecto hecho por el profesor del ramo en la Universidad de Chile i Fiscal de la Corte Suprema, don Miguel Luis Valdes.

TÍTULO PRIMERO

Del poder judicial i de la administracion de justicia en jeneral

ARTICULOS 1.º, 2.º i 3.º—El objeto del poder judicial es administrar justicia, esto es, ejercer las facultades que le



confieren estos tres primeros artículos i es lo que en la terminología del Derecho Procesal se llama *jurisdicción*.

El artículo primero consigna el mismo principio del art. 99 de la Const. «La facultad de conocer de las causas... etc...»

CAUSA es una contienda suscitada entre partes (que pueden ser un particular o una persona jurídica) i sometida a la resolución de un tribunal.

Para que haya causa es preciso que no sea una contienda abstracta; debe en ellas ventilarse un interes actual i privado de las partes; es necesario que se inicie por el ejercicio de una accion que solo surge de súbito i aparece en toda la magnitud de su eficacia desde que se produce la lesion o violacion de un derecho. Por esto mismo los tribunales no definen conductas futuras.

Respecto de las causas, este art. confiere a los tribunales tres facultades: «la de conocerlas» que consiste en instruir el proceso, en tramitarlo, i en virtud de lo cual se da traslado, se oyen testigos, se dictan medidas precautorias, embargos, etc.; es la que se ejercita durante la secuela del juicio... «la de juzgarlas» facultad por excelencia, que es fallar, resolver la contienda... i «hacer ejecutar lo juzgado»... Científicamente sería mas propio que ésta la poseyera el poder ejecutivo; pero para asegurar la independencia del poder judicial se da a él esta facultad que ejercida por otro poder, podría traer graves inconvenientes, entre los cuales no serian los mas raros la tergiversacion del fallo o su interpretación torcida. Como el poder judicial no dispone de la fuerza pública, necesita del ausilio del ejecutivo cuando la haya menester, el que debe prestarla sin que



le corresponda averiguar el fundamento con que se le pide o la justicia o injusticia de la resolucion que ha de cumplirse, (art. 10).

Esta parte de la jurisdiccion de los Tribunales es la *jurisdiccion contenciosa*

ART. 2.º La jurisdiccion no contenciosa, llamada tambien voluntaria, aunque impropriamente, consiste en intervenir los Tribunales en todos aquellos actos que no son contienda... «en que una lei espresa requiera su intervencion.»

En consideracion a los intereses de los incapaces la lei da estas facultades a los Tribunales i aun en beneficio de personas capaces que por imprevision pudieran ver comprometidos los suyos, por ej., en la donacion o en algunos casos para dar mayor solemnidad al acto, como es el de la apertura de un testamento cerrado, etc...

«Lei espresa»... mal dicho porque no las hai tácitas.

ART. 3.º Ademias, les conliere esta lei a los Tribunales, las facultades CONSERVADORAS; DISCIPLINARIAS I ECONÓMICAS...

Cuando se redactó este artículo se dijo que la espresion «conservadora» se usaba en el sentido que le da la Constitucion en los arts. 48 i 49, es decir, en el sentido de prestar proteccion a las garantias individuales, como en el caso de prision indebida, (art. 134 de la Const). El art. 121 de esta lei establece cuál es la majistratura a que se refiere este artículo de la Constitucion. Análoga a esta facultad es la establecida en los arts. 42, 50, 72, etc... «Disciplinarias»... que consisten en velar por el buen réjimen i funcionamiento de los Tribunales i del orden de los que deben recurrir a ellos, es decir, poniendo en sus manos la facultad



de poder reprimir todo abuso que se cometa i castigarlo sin forma de juicio, (arts. 23, 43, 44, 46, 49, 68, 69, 70, 108, 109, 110, etc...)... «Económicas»,... que se refieren al régimen administrativo interior de los Tribunales, (provision de empleados judiciales, administracion de oficinas), (arts. 18, 36, 122, 320, 344, etc...).

ART. 4.º Establecida la mision del poder judicial, la ley ha querido prohibir espresamente que salga de sus atribuciones i así lo dice en este artículo que viene a repetir el precepto constitucional del art. 151. Esto no significa que los Tribunales no puedan examinar los actos emanados de otras autoridades, intervencion que está en el marco de sus funciones cuando las tales no proceden dentro del ejercicio lejítimo de las atribuciones que la lei les confiere.

ART. 5.º Establece que se refiere a los Tribunales que enseguida detalla: jueces de distrito, jueces de subdelegacion, jueces de letras, Corte de Apelaciones y Suprema.

Antes de dictarse esta ley eran numerosísimos los Tribunales de fuero privilegiado, militar, relijioso, de comercio, derivaciones de las ideas dominantes en la Edad Media, esta lei los abolió todos en el inciso 1.º de este art. Las escepciones provienen algunas de preceptos constitucionales, otras como una garantía de la disciplina militar, etc.

«En el órden temporal» para distinguirlo del órden espiritual porque este artículo concluyó con el fuero eclesiástico. Su aprobacion despertó grandes resistencias en el clero i en los que se inspiraban en sus creencias. Necesario fué que se pidiera ántes permiso a la Santa Sede para abolirlo, la que lo concedió a condicion de que se abolieran a su vez los recursos de fuerza i de que ántes de aplicar pena cor-



poral a un ordenado in sacris se diese cuenta a la autoridad eclesiástica para proceder previamente a su degradacion canónica. Los recursos de fuerza eran los que podian entablar las personas, a quienes estaban juzgando los tribunales eclesiásticos en asuntos que no eran de su competencia, ante la Corte Suprema.

Esta injerencia de la potestad civil en la potestad eclesiástica era lo que no podía tolerar la autoridad eclesiástica i que de hecho quedó abolida con la abolicion del fuero eclesiástico.

Limitadas las decisiones de la autoridad eclesiástica a lo espiritual pueden, sin embargo, en algunos casos tener efectos temporales i es en estos en los que se pone el artículo que tratamos al decir que «por eso no dejan de ser espirituales», como ser pérdidas de beneficios por indignidad, nulidad de profesion relijiosa i las que tienen por objeto la provision de capellanías eclesiásticas. Este es el único caso en que puede haber conflictos entre los tribunales laicos i los eclesiásticos. Las capellanías pueden ser laicales o eclesiásticas. En este último caso son meramente espirituales, pero producen efectos temporales. Las laicales son proveidas por la autoridad temporal. En este caso el conflicto que resulte corresponde resolverlo a la CORTE SUPREMA, (Art. 255).

Tambien atribuia este art. en el inciso penúltimo a los tribunales eclesiásticos la decision de las causas matrimoniales, lo que está actualmente derogado por los arts. 2 i 3 de la Lei de Matrimonio Civil. Sin embargo, la autoridad eclesiástica sigue fallando esta clase de asuntos, pero solo en lo referente al sacramento.



Deja vijente esta lei, sin embargo, como tribunales especiales: el *Senado* en las acusaciones que la Cámara de Diputados puede hacer a las personas que se indican en los arts. 29 i 74 de la Constitucion;

N.º 2.º El *Consejo de Estado* (art. 95, núms. 4, 5 i 6 de la Const.) en los casos de patronato o, sea, en los de supervijilancia o intervencion del Estado sobre la Iglesia Católica. El Tribunal a que se refiere este art. 95 de la Const. es la Corte Suprema.

Recurso de proteccion es la queja que un particular interpone de un agravio hecho por una autoridad ante el superior respectivo o ante la autoridad llamada a remediarlo. Reducido este recurso a contencioso, seria tallado por el Consejo de Estado como tribunal de lo *administrativo-contencioso*. Otra atribucion del Consejo de Estado es la de declarar si ha lugar o no a la formacion de causa contra los intendentes i gobernadores.

Estos funcionarios gozan de dos clases de fueros: este i el de que en cualquier causa civil o criminal en que se hallen envueltos deben ser juzgados por un tribunal de excepcion, como es la Corte de Apelaciones. El primero dura solo miéntras conserva su puesto.

N.º 3. El jurado de imprenta declara si ha lugar o no a la formacion de causa i califica la gravedad del delito.

N.º 4. El fuero militar se refiere tanto a lo civil como a lo criminal. Esto se necesita para mantener la disciplina militar. Los «delitos meramente militares o que consistan en la infraccion de las leyes especiales del ramo» quedan sometidos a los tribunales militares aunque sea un paisano el que lo comete.



N.º 5. Este núm. se refiere no ya a los delitos militares sino a los comunes cometidos por militares en campaña, en actos del servicio militar o dentro de los cuarteles. **CUARTEL** es toda habitación de un cuerpo de ejército con sus dependencias. Dependencias son los retenes, fortalezas, naves de guerra, polvorines, arsenales i depósitos de guerra: todos los recintos destinados al servicio del ejército.

Ejército en Campaña es el que está en actual operacion de guerra contra el enemigo, sea este interior o exterior.

Cuando el Presidente de la República decreta el estado de asamblea se entiende que estan en campaña todas las tropas que se encuentran dentro del paraje que él comprende.

Acto del servicio es aquel en que obra la persona de que se trata como fuerza pública, ejecutando algo en virtud de la obediencia pasiva que debe a su superior.

Ejemplos. Si un paisano roba armas del ejército será juzgado por los tribunales militares porque viola las reglas especiales del ramo (Art. 5.º N.º 4).

INC. 2.º En lo civil no hai mas juicios sujetos al fuero militar que los que provengan de deudas que no exedan de \$ 200 de la administracion militar, «siempre que fueren interpuestas por los subalternos en contra de sus superiores».

N.º 6.º La lei de 20 de enero de 1888 suprimió la Contaduría Mayor i estableció i reglamentó el actual Tribunal de Cuentas.

Cuentas fiscales son las que se refieren a la administracion de los caudales públicos: el exámen de las cuentas que deben rendir las personas u oficinas encargadas de



la inversion, recaudacion i administracion de fondos fiscales.

Este tribunal conoce de las cuentas fiscales, de beneficencia pública i municipales.

La lei de Municipalidades de 22 de Diciembre del 91 establecia, para conocer de estos últimos, un tribunal especial, que fué abolido por lei de 14 de setiembre de 1896, que sometió el exámen i juzgamiento de las cuentas municipales a la jurisdiccion del tribunal que conoce de las cuentas fiscales, es decir, al Tribunal de Cuentas.

A pesar de haber abolido la lei de 15 de Octubre del 95 todos los tribunales de fuero especial, dejando solo subsistentes los que ella misma reconoce en su art. 50, leyes posteriores han creado nuevos tribunales con fuero especial. Vamos a ver los principales:

Lei de 15 de Octubre de 1875, promulgada el mismo dia que el código que estamos estudiando. Establece una especie de fuero especial para las Compañías de Gas i Agua Potable, creando el puesto de Inspectores de estos establecimientos, que conocen como jueces de 1.^a instancia de las causas que se suscitan entre dichas compañías i sus consumidores con apelacion a los jueces de letras.

Lei de policías sanitarias, de 30 de Diciembre de 1886.— Estableció en su art. 9.^o que en casos de epidemias, cerrados los puertos o declarada infectada una o mas poblaciones, las multas en que incurran los infractores a las disposiciones sanitarias seran cobradas administrativamente, lo que constituye sin embargo, una funcion escencialmente judicial, justificada esto en cierto modo por la necesidad de proceder breve i sumariamente.



Lei de 22 de Diciembre de 1891.—En su artículo 24, núm. 5.º da a las Municipalidades la facultad de nombrar Inspectores de mercados i mataderos, quienes, entre otras facultades, tienen las de decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones que se susciten entre vendedores i compradores hasta por la suma de \$ 5.

Lei de 9 de Agosto de 1894.—Estableció el juez especial del Matadero de Santiago dependiente de la Municipalidad. Este juez, que debe ser abogado, es nombrado en la misma forma que los de subdelegacion. Le corresponde conocer en única instancia hasta por \$ 50 i en 1.ª instancia, con apelacion al juez especial de Apelaciones, en todas las causas que se susciten con motivo de obligaciones que razcan de transacciones hechas en el Matadero o que deban cumplirse en él. Tiene tambien jurisdiccion criminal.

Lei de 31 de Diciembre de 1897.—Hizo estensiva al Matadero de Valparaíso las disposiciones de la anterior.

Lei de 20 de Enero de 1897.—En el art. 2.º se dispone: que los administradores de Aduana tendrán la facultad de entender en las causas por infraccion a los reglamentos de aduana (causas de comiso), siempre que no esten penadas con una multa superior a \$ 100. Antes de la lei Orgánica de Tribunales habia un *Tribunal Especial de Comiso* que se reunía en Valparaíso. Este quedó de hecho derogado por el art. 5.º de esa lei. El art. 3.º de la lei de 25 de Enero de 1897 establece que las resoluciones de los Administradores de Aduana son apelables ante el superintendente de Aduanas.

Así como leyes posteriores a la lei orgánica de tribunales crearon tribunales de fuero especial que esa lei no reconoce,



así ella derogó i abolió muchos que ántes de su promulgacion existian.

Ejemplos.—1.) *Los jueces prácticos* cuya existencia reconocia el Código Civil en sus arts. 855 i 2002.—La Constitucion del año 23 estableció estos jueces prácticos que eran los que intervenian en todos aquellos juicios que requerian conocimientos técnicos especiales o exámen del objeto disputado. La Constitucion del año 33, al decir que quedaba vijente todo lo que las constituciones anteriores establecian sobre organizacion judicial, dejó en vijencia estos jueces que sólo fueron abolidos por la lei orgánica.

2.) *Los jueces de agua* cuya mision era distribuir las aguas de un río, etc. El establecimiento de estos jueces fué de dudosa constitucionalidad: ellos fueron creados por una ordenanza jeneral del Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Estado, en Enero de 1872, siendo que la Constitucion dice que se requiere una lei para crear nuevos tribunales.

La *Lei de Municipalidades de 22 de Diciembre de 1891* en su art. 26, núm. 2, vuelve a dar vida a los jueces de agua, que nuevamente fueron abolidos por el Código de Procedimiento Civil (Tit, 11 del Libro III), que estableció un tribunal especial para tales juicios.

Un *decreto de Abril de 1835* estableció el *Protomédico*, que tenia una especie de supervijilancia jeneral con funciones judiciales sobre los médicos, farmacéuticos, matronas, etc. i que resolvia hasta de los honorarios que a estos correspondian por sus servicios.

La *Lei sobre caminos públicos de 17 de Diciembre de 1872*, aun vijente, fija las condiciones para abrir caminos,



el ancho que estos deben tener, etc. Esta lei establecia la llamada *junta de camino*, tribunal que conocia de los juicios que se originaban con motivo de la apertura de un camino, de la colocacion de los cierros, etc.

(Un paréntesis).—La jurisdiccion que ejerce un juez diputado por el juez que conoce de la causa ¿es jurisdiccion suya o delegada?—Ni la Constitucion ni lei alguna autorizan a un juez para delegar sus funciones en otro; luego hai que considerar esta jurisdiccion como la propia ejercitada por el juez diputado para ayudar al juez que conoce de la causa.

Art. 7.º *Avocarse* es llamar hácia sí, traer a su conocimiento.

El art. 47 contiene un caso de avocamiento autorizado por la lei, caso de escepcion. Tambien el art. 54, que es hoy letra muerta porque todos los departamentos tienen juzgados de letras.

La *Lei de visitas*, de 4 de Julio de 1893, en su art. 3.º inc. 2.º contiene tambien una disposicion semejante.

Art. 8.º—La publicidad de la administracion de justicia tiene por objeto la vijilancia y fiscalizacion que todos pueden ejercer sobre ella, lo que conduce a la mayor correccion. Esta disposicion de la publicidad está corroborada por el art. 346, núm. 3.º

Procedimiento secreto... Ejemplos: artículo 44 (libro privado), art. 94 (acuerdo, estudio i discusion entre los jueces de un tribunal colegiado para fallar una causa.) 268 Lei Orgánica; 292 Código Civil; 183 Código de Procedimiento Civil. En los procesos criminales el sumario es secreto. Son tambien reservadas las solicitudes presentadas por las



partes al tribunal para su despacho: no pueden darse a conocer sino cuando hai resolucion judicial.

Por último, las mismas resoluciones judiciales son reservadas para toda persona mientras no son notificadas a los litigantes.

La disposicion de este artículo era indispensable para que los jueces tengan libertad de accion i de manifestar ampliamente su opinion.

ART. 9.º Los tribunales son autoridades de carácter pasivo que dirimen cuestiones de interes privado. Por esta circunstancia obran, en jeneral, a peticion de parte salvo los casos en que, por tratarse del orden o interes social, deben proceder de oficio.

Este art. 9.º tiene relacion con el art. 196 del mismo código.

Cuando no hai lei se aplican los principios jenerales de lejislacion o mejor dicho, en último término, la equidad natural. Esto está espresamente dispuesto en el art. 193, N.º 5.º del Código de Procedimiento Civil. En ningun caso puede un juez, aun en el de no haber lei, escusarse de aplicar esta en los asuntos de su competencia para que son requeridos.

La sancion de la infraccion a este precepto se encuentra en los arts. 224 i 225 N.º 3.º del Código Penal (Prevaricacion).

ART. 10. La facultad de los tribunales para hacer cumplir o ejecutar las sentencias se llama *imperio judicial*. Para ejercitar este imperio debe la autoridad administrativa facilitar al juez el auxilio de la fuerza pública cuando este lo solicite sin entrar a apreciar si la sentencia es justa o no.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Segun una lei, la autoridad administrativa puede cuando lo estime conveniente, hacer que la peticion se haga por escrito.

Pero para que la autoridad administrativa conceda la fuerza pública es necesario que ella sea *«legalmente requerida»*. Esta legalidad es de dos clases: *legal en el fondo*, es decir, hecha por un funcionario que tenga facultad para ello i *en la forma*, es decir, guardando la formalidades legales del caso (por escrito, etc.)

Corroboran a esta disposicion: art. 21, N.º 20 de la lei de Régimen interior; art. 83, N.º 19 de la de Municipalidades.

Con todo de ser tan claras i esplicitas estas disposiciones, han surjido i surjen a menudo conflictos entre estas autoridades con grave perjuicio de la administracion de justicia, sobre todo en materia criminal. Esto por falta de una policia judicial. En parte se han subsanado estas dificultades con el decreto N.º 2035, de 27 de Mayo de 1904, del Ministerio del Interior: «Vistos... Los Intendentes i Gobernadores pondran constante i permanentemente a disposicion del juez un guardian de policia para todos los actos urgentes... etc., sin perjuicio de que cuando este necesite una fuerza mayor la pida i aquellos la concedan».

ART. 11. Cosa ya vieja. Esto está consagrado en la misma Constitucion: art. 99, reforzado por los arts. 100 i 101 que asientan a firme la independendencia del poder judicial. Tiende a lo mismo la Lei de Régimen Interior: art. 17.

La sancion de este precepto se encuentra en el art. 222 del Código Penal.

ART. 12. Estos casos los trata o, por lo ménos, hace re-



ferencia a ellos, el título IX de esta lei, (De la responsabilidad de los jueces).

La sancion de estas infracciones se halla en el título de la «Prevaricacion» del Código Penal. (Arts. 213 i siguientes). Los jueces no responden de sus hechos lícitos e ilícitos sino en los determinados casos de que trata esta lei.

TÍTULO II

De los jueces de distrito i de los jueces de subdelegacion

De los jueces de distrito

ART. 13. La diferencia entre estas dos categorias de jueces estriba en la estension de sus atribuciones i en la del territorio que respectivamente les asigna la lei para ejercer su jurisdiccion. Juez de distrito es aquel cuyo territorio jurisdiccional es el distrito, *Distrito*. Encontramos esta division en el art. 106 de la Constitucion.

Los jueces de distrito—en órden a sus atribuciones—no ejercen jurisdiccion criminal. Sólo ejercen jurisdiccion contenciosa en materia civil hasta cierta suma. Tratándose de asuntos no contenciosos no tienen ellos la menor facultad.

No es lo mismo una *causa* que un *asunto no contencioso*. El art. 1.º de esta lei trata de las «causas» i el art. 2.º de los «asuntos no contenciosos». Ambos se encuentran comprendidos en la denominacion jenerica de *asuntos judiciales*. La causa lleva envuelta la idea de pleito o litijio.

Un juez o tribunal puede tener conocimiento de una



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

causa para juzgarla en primera instancia, o bien en segunda instancia o bien en única instancia.

Instancia: son los diversos grados del juicio en un asunto judicial.

Única instancia es el juicio que se da sin que halla lugar a apelacion.

Los jueces de distrito sólo pueden conocer de los asuntos judiciales de su competencia en única i en primera instancia; no en segunda desde que representan el tribunal inferior en la escala judicial.

ART. 14. Por la reforma hecha en el artículo 7.º de la Constitucion i por el art. 25 de la Lei de Elecciones se deroga el N.º 3.º de este art. 14.

ART. 15. «*Profesion liberal*» dijo el Sr. Ministro que eran las adquiridas por títulos universitarios. (?). El Código Civil ha tomado esta palabra *liberal* en las mismas acepciones: art. 243, 2118; segun este, para que haya profesion liberal se requieren largos estudios; 2521. En resumen, es la que se obtiene por un título universitario despues de largos estudios.

El diccionario habla de «arte liberal», pero no de profesion liberal. Segun él en el arte liberal se ejercita mas que nada el entendimiento.

Serian, entonces, profesiones liberales: la abogacia, la ingenieria, la medicina i la pedagogia.

ART. 16. El N.º 6.º es la única prohibicion por razon de otro empleo incompatible. El N.º 7.º (inc. final) es una escepcion al art. 93 del Código Penal pues, segun éste el indulto sólo borra la pena pero no quita al indultado el



carácter de penado. Aquí se refiere a toda pena, considera el indulto como amnistia.

Art. 17. Se estingue el cargo, ademas, por otras causas espresadas en el art. 169 de esta lei en lo que sean aplicables a esta clase de jueces.

Art. 20. «Cargo consejil» es el que no es rentado i debe ser servido por los ciudadanos sin que puedan escusarse, a ménos que tengan causa justificada.

Art. 23. Estas facultades se van ampliando a medida que se sube en la escala judicial. Estas resoluciones del juez son apelables aunque, segun el contesto de este artículo, parecen lo contrario. Así lo entendieron muchos. Los que creyeron que debian ser apelables provocaron el proyecto de lei, que fué lei el *16 de Octubre de 1884*. Segun ésta son apelables. Esta lei viene a hacer ilusoria la facultad del juez para hacer observar el orden. Esto es un absurdo.

(Un paréntesis). Alguien dijo que la lei de servicio militar en su art. 36 fijaba una inhabilidad mas para ser juez de distrito. No es exacto. Ese art. dice mas o ménos: «que los que no estan inscritos en los registros del servicio militar obligatorio quedarán inhabilitados para cargos i oficios públicos, pagando además cierta multa, amen de tener que hacer el servicio forzosamente en un cuerpo como individuos de línea por cierto tiempo». I el art. 39, para que no haya lugar a duda, dice, por su parte: «En los juicios de infraccion o exencion a que se refieren los artículos que preceden i, en jeneral, a las contravenciones de los deberes que impone esta lei, conocerá en primera instancia el juez de letras del departamento, cualquiera que sea el fuero del



contraventor i en segunda la respectiva Corte de Apelaciones.

De manera que es necesario que haya un juicio, que se siga i del cual conocerá el juez del departamento. Como hai delito habrá pena. De suerte que esta lei no fija ninguna inhabilidad nueva desde que toda pena trae inhabilidades o, mejor dicho, son inhabilidades resultantes de ciertas penas. La infraccion sólo, si no ha sido perseguida i sentenciada, no produce este efecto de inhabilitacion. Así lo estableció la Corte Suprema en una sentencia que revocó la de primera instancia la cual establecia la inhabilidad por el sólo hecho de no haber sido inscrito el individuo.

ART. 24. Pero si el acto o actos a que se refiere el artículo anterior constituye un delito hará el juez prender al reo para ponerlo a disposicion del juez competente (juez de letras).

ART. 25. Esta es la regla jeneral: los jueces de distrito fuera de la cabecera del departamento deberan, respecto de los individuos que cometan delitos dentro de sus distritos, instruir el sumario correspondiente. El art. 24 deberia estar despues del 25, pues, es una escepcion que se refiere indudablemente a los jueces que no tienen facultad de instruir sumarios, es decir, a los jueces cuyos distritos estan en la cabecera del departamento, pues, si un juez de los primeros puede instruir sumario respecto de los individuos que cometen delitos dentro de sus distritos con cuanta mayor razon podrá hacerlo respecto de aquellos que los cometen dentro de sus propias salas de despacho.

En la formacion de los sumarios, el juez de distrito no puede obrar por si solo: necesita la intervencion del minis-



tro de fé o, en subsidio, la de dos testigos. No porque pueda este juez instruir sumarios vaya a creerse que tiene jurisdiccion criminal. Nó: es «jurisdiccion» la facultad de perseguir i de juzgar. Esto es, sencillamente, abrir el proceso; son estas meras facultades instructivas que en otros paises se deja a la policia judicial dirigida por el Promotor Fiscal.

Art. 26. Segun el Código de Procedimiento debe haber siempre proceso escrito para que haya juicio. Segun este Código de Tribunales sólo las sentencias deberán constar por escrito, tratándose de estos jueces. Esta sentencia es la orijinal del juez; no es copia. Esta disposicion ha tenido por objeto el evitar el papeleo por el cual los ministros de fé u otros empleados judiciales, que devengan emolumentos, explotan a los litigantes. Pero desgraciadamente, esta disposicion no se cumple i se forman en estos juzgados expedientes voluminosos como los de los mismos juzgados de letras. El art. 867 del Código de Procedimiento ha modificado esta disposicion, permitiendo que haya expedientes, pero que son sumarios i suscintos i que solo contienen lo que ese art. señala.

Inc. 3.º Se refiere al archivero judicial, ministro de fé de que habla el art. 378. Mejor habría sido decir a la notaría mas antigua, pues es esa la idea. Esto de que sea a la notaría mas antigua i nó al notario mas antiguo, tiene por objeto dar facilidades a los que necesitan estos documentos: la oficina es estable i en cualquier momento se puede dirigir una persona a ella, sabiendo con toda certeza que ahí se guarda el documento. Los notarios se mudan i seria mui



molesto i engorroso dar con el mas antiguo en aquella época en que se archivó el documento.

ART. 27. En su morada o en un lugar fijo i conocido de sus vecinos.

ART. 28. Tres dias de la semana por lo ménos i una hora por lo ménos.

ART. 29. El cartel se fija en su morada, firmado de su mano.

ART. 30. ¿Qué ministro de fé es este? Un receptor de menor cuantía (art. 353). Segun el art. 354, inc. 2.º, un receptor de menor cuantía puede servir varias subdelegaciones a la vez. Porque hai subdelegaciones de tan escaso valer, que no los tienen.

Interviniendo en materia criminal el juez del distrito, todo acto de cualquiera naturaleza que sea, debe ser autorizado por el ministro de fé o, en su defecto, por dos testigos. El art. 25 ha quedado intacto, pues todavia no se ha dictado el Código de Procedimiento Criminal.

Pero en materia civil es otra cosa. Toda resolución escrita, segun esta lei, de estos jueces deberá ser autorizada por el respectivo ministro de fé. Si este no existe, nada habla el Código de testigos, por lo que se entiende que estos no deben concurrir. Pero si se trata de una sentencia definitiva, a falta del ministro, deberán entrar los dos testigos.

Parece que el art. 64 del Código de Procedimiento Civil envolvía una contradiccion, al decir: «La autorizacion del funcionario a quien corresponda dar fé o certificado del acto es especial para la validez de las actuaciones».

Pero, en el fondo, no hai contradiccion alguna entre estas disposiciones.





El art. 867 del Código de Procedimiento significa ya una modificación: «De todo lo que en la primera audiencia se levantará acta firmándola el ministro de fé i a falta de éste, un actuuario...»

Pues, habla de un actuuario nombrado por el juez para que desempeñe el papel de ministro de fé en el caso de que éste no exista presente.

En resumen, ninguno de estos artículos citados modifica por sí solo el art. 3o del Código de Tribunales sino que los dos juntos. Entónces, si en el caso del art. 64 no hai ministro de fé, se aplicará el art. 867. En materia civil, repetimos, las actuaciones deben ser autorizadas no por lo que el art. 3o dice sino por lo que dicen los arts. 64 i 867 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 31. Se refiere a ciertos ministros de fé: a los receptores, nó a los notarios ni secretarios de juzgados. I en cargos como estos, por ejemplo, notificaciones, embargos, lanzamientos, tomar declaraciones sin testigos, etc.

No hai contradiccion entre este art. i el art. 78 del Código de Procedimiento Civil que dice: «Toda comunicacion para practicar actuaciones fuera del lugar del juicio será dirijida, sin intermedio alguno, al tribunal o funcionario a quien corresponda ejecutarla, aunque no dependa del que reclama su intervencion».

Pues, este último se refiere a las diligencias cometidas, en cuanto juez; nó en cuanto ministro de fé. I estas, es decir, en cuanto juez, sí que se hacen sin intermedio alguno.

ART. 32. Art. 1,600 del Código Civil.

Es, talvez, la única disposicion que habla de inspectores.



De los jueces de subdelegacion

ART. 33. 1.º El N.º 4.º del art. 495 del Código Penal se refiere a insubordinaciones.

Diferencias entre los jueces de distrito i los de subdelegacion:

1) Estós tienen jurisdiccion plena en materia criminal (tratándose de faltas), aquellos nó;

2) Conocen en segunda instancia; los de distrito solo en primera o única;

3) Los jueces de distrito conocen en única instancia en materia civil cuando el monto de la cosa no pasa de \$ 20. Los de subdelegacion no pueden nunca conocer en única instancia, salvo en recursos de casacion, de que habla el N.º 3.º de este art 33 i que es otra cosa. Así, mientras pueden en ciertas ocasiones los jueces de distrito fallar sin apelacion, de toda resolucion de un juez de subdelegacion se puede apelar.

N.º 3.º Llámase *recurso de casacion* a un recurso de nulidad que se entabla contra una sentencia. Se persigue en estos que se revea la sentencia para dar o nó lugar a la nulidad solamente.

El *recurso de apelacion* mira a la revision de la sentencia en órden a enmendar los defectos legales, las injusticias.

Hai *casacion en la forma*—cuando hai defectos en la tramitacion—i *casacion en el fondo* cuando los hai en el fondo, en los fundamentos de la sentencia.

ART. 34. La espresion «falta» no está tomada aquí en el sentido que le da el Código Penal, es decir de delito, porque de esta ya se ha tratado en el núm. 1.º del art. 33,



sino en la ascepcion de abuso, falta de respeto o de orden i compostura, puesto que, ademas, estas represiones no tienen el carácter de penas. Estas facultades son las que el art. 3.º de esta lei concede a los jueces en tanto que aquellas están contempladas en el art. 1.º de la misma.

ART. 35. Por ejemplo, en el pago por consignacion, en la autorizacion de un testamento solemne (tres testigos, notario, etc.) arts. 1600, 1014 Código Civil; en el art. 727 i en el 729 del Código de Comercio, etc., etc.

ART. 36. Esto es, por ejemplo, condiciones para ser jueces de distrito, causas de excusas, tiempo para ejercer el cargo, nombramiento, lugar de administrar justicia, libro de sentencias que deben llevar, etc., etc.

Hai esta diferencia: los jueces de subdelegacion dentro de las cabeceras de departamentos pueden instruir sumarios por los delitos que se cometen «dentro de su sala». Los de distrito no.

TÍTULO III

De los jueces de letras i de los alcaldes

De los jueces de letras

ART. 37. Se dice en este núm. 1.º en primera o única instancia porque puede o no haber apelacion segun el art. 243. Hai que recurrir a él para saber cuando la hai o no.

La regla jeneral es la de que de toda resolucion de los jueces letrados se puede apelar. Pero el inc. 2.º del art. 243



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

dice: «los jueces de letras son competentes para fallar en única instancia las causas en que el valor de la materia no pase de \$ 300». Pero hai que fijarse que este inc. se refiere a «causas» i no a «actos judiciales». Así, que, en resumen: conocen en única instancia de las causas cuyo valor no pasa de \$ 300 i en primera instancia de las que sobrepasan esa cantidad i de los actos judiciales no contenciosos.

Respecto de estos últimos hai siempre apelación de sus sentencias. El juez de letras es competente siempre para conocer de estos actos cualquiera que sea su cuantía; sólo la consideracion de las personas puede hacerlo incompetente como veremos enseguida; pero nunca la cuantía.

El art. 494 del Código Civil se refiere a los curadores «ad litem» para cuyos nombramientos es competente la judicatura que conoce del pleito (jueces de subdelegacion, de distrito o de letras, etc.)

«De las causas civiles cuyo valor exceda de \$ 200». Aquí cabe la disposicion del inc. 2.º del art. 243.

«De las causas de comercio, minas, hacienda» cualquiera que sea su cuantía. Aunque son estas causas civiles, las repite porque esta acepcion de civil se usa mas o ménos restringida segun los casos i segun sea a que se contrapone. Así, causa civil, contrapuesta a criminal, comprende toda clase de causas civiles; fuero civil i fuero militar: aquí está restringida. Lo mismo está restringida en la parte que nos ocupa.



Al hablar de que los jueces de letras son competentes en estas causas quiere significar que sólo ellos lo son sin que

en ningun caso puedan serlo los jueces inferiores aunque la cuantía de la materia sea mínima.

Juicios de comercio son aquellos que se ventilan por la lei mercantil; aquellos cuyas obligaciones se rijen por el Código de Comercio; de minas lo propio.

«De las criminales por crimen o simples delitos». Esta facultad es *privativa* o *exclusiva* de ellos. Tratándose de faltas la facultad de estos es *preventiva* o *acumulativa*. Se dice *preventiva* cuando hai varios tribunales competentes (porque hemos visto que conocen tambien de las faltas los jueces de subdelegacion) para conocer de lo mismo, pues, si uno conoce o «previene» ya del juicio, el otro se hace incompetente. I *acumulativa* porque acumula sus atribuciones i las del otro tribunal. Hemos visto que, segun el art. 9.º i el 196, no puede escusarse un juez para conocer de un asunto alegando que hai otro tribunal competente tambien.

Al hablar el art. 243 de causas civiles se refiere a toda clase de estas; está en su acepcion lata, comprende, pues, las de comercio, minas, hacienda, etc.

En materia criminal sólo pueden conocer en primera instancia. Ninguna lei ni práctica los autoriza para conocer en única instancia.

«Comandante jeneral de marina»... director jeneral de Armada.

«Comandante o inspector jeneral de guardias nacionales»... no existe ya.

Esta escepcion del art. 67, aunque el presente art. 37 no habla nada del Presidente, gobernadores, intendentes, etc., se hace porque en un pleito pueden ser partes los que.



aquí se indican con los que el art. 67 señala. Entonces prevalece este art. 67 porque esta es la regla del Derecho Procesal de que el tribunal superior absorbe, prevalece sobre el inferior.

Las escepciones de los arts. 116 i 117 tienen lugar cuando se trata de acusaciones o demandas civiles para hacer efectiva la responsabilidad civil o criminal de algun miembro o miembros de las cortes de Apelaciones o Suprema. En el primer caso, es decir, tratándose de un miembro o miembros de la Corte de Apelaciones (art. 117) conocerá en primera instancia uno de los ministros de la Corte Suprema; en segunda la sala a que éste pertenece; en el segundo (art. 116) conocerá en primera instancia el presidente de la Corte de Apelaciones i en segunda las dos salas de ella reunidas, sin el presidente.

Tambien uno de los miembros de la Corte Suprema conocerá de las causas de presas, de estradicion i demas que deben juzgarse con arreglo al derecho internacional.

N.º 3.º Estas casaciones contra los jueces de distrito, subdelegacion i aun de letras son casaciones en la forma porque de ellos casi no se puede exigir mas que se ajusten bien al ritual del procedimiento i de la tramitacion. La casacion en el fondo tiene lugar contra los miembros o tribunales superiores, es decir, las Cortes de Apelaciones, porque éstos están llamados a sentar doctrina en sus sentencias.

Todas estas atribuciones de que hemos hablado de los jueces de letras les han sido conferidas por la lei de 15 de Octubre de 1875.



Hai ademias, otras especiales, conferidas por otras leyes particulares:

La Ordenanza Jeneral del Ejército en el art. 1.º del Tít. 75 dispone que en las provincias seran *auditores de las comandancias jenerales* los jueces de letras. En Valparaíso seran *auditores de marina*.

La lei de Montepio Militar, de 6 de Agosto del 55, dispone en su art. 26 que las personas que se crean con derecho a montepio i no dispongan de documentos con que atestiguarlo, deberan rendir la informacion de testigos ante el juez de letras.

La lei de 31 de Julio del 56 que reglamentó la casa de Orates, en su art. 12 dice que corresponde al juez del crimen conocer de las reclamaciones de los asilados i en su defecto las que les haga cualquiera persona.

La lei sobre inspectores de las empresas de gas i agua potable de 15 de Octubre del 75, en los arts. 3.º, 5.º, i 6.º faculta a los jueces de letras para fallar verbalmente las reclamaciones de consumidores i de las empresas en contra de los inspectores; para imponer multas hasta de \$ 300 a las empresas que no cumplan sus deberes i para cortales las cañerías a los consumidores.

La lei que creó el Tribunal de Cuentas de 20 de Enero del 88 dice que corresponde a los jueces de letras conocer en las causas en que trate de hacerse efectiva la responsabilidad de sus empleados cualquiera que sea su cuantía.

La lei de Elecciones de 20 de Agosto del 90 les confiere muchas. Por ejemplo el art. 40 dice que les corresponde «conocer de las reclamaciones por inscripciones, etc.» el art. 53: «cuando la Municipalidad no se ha reunido para



el nombramiento de juntas receptoras corresponde al juez del crimen hacerlas reunirse;» el 58: «conocer de las exclusiones e inhabilidades de los vocales;» el 59: «nombrar los reemplazantes de éstos;» i así muchas otras en los arts. 109, 116, etc.

La *lei de Municipalidades de 22 de Diciembre del 91* en su art. 15 establece accion para ocurrir ante el Juez de Letras por las exclusiones i calificaciones ilegales de sus miembros hecha por la municipalidad.

Ademas en su art. 49: «Autoriza las reclamaciones para ante el Juez de Letras de los avaluos que haga la Municipalidad».

En su art. 100: «Da accion popular para reclamar de las resoluciones de las asambleas de electores cuando éstas niegan los fondos necesarios para el sostenimiento de los servicios municipales, ante el Juez de Letras».

En su art. 101: «Da accion popular para hacer efectiva ante el Juez de Letras la multa en que incurren los municipales i funcionarios municipales por no dar cumplimiento a los deberes que la lei les impone».

La *lei de Reclutas i Reemplazos de 5 de Setiembre de 1900* en el art. 39 les confiere «la facultad de conocer en los Juicios sobre infracciones i exenciones».

La *lei sobre contribucion de patentes de industriales i profesionales de 22 de Diciembre del 66* en su art. 10 dice que los Jueces de Letras «conocerán en única instancia en las reclamaciones por el pago de patente de la industria o profesion».

ART. 38. El territorio jurisdiccional de los jueces de letras no está establecido por la lei de tribunales. Esto porque a



la época en que se dictó esta lei las condiciones económicas, el desarrollo de los negocios, etc., no lo permitian. Había departamentos de mucho movimiento en este sentido i otros de casi ninguno. De esta suerte habia jueces de letras que ejercian su jurisdiccion en dos o mas departamentos i aun en provincias enteras. Esta lei dejó las cosas tal como estaban. Pero la de 31 de Enero de 1888 la derogó, diciendo que habria un Juez de Letras en cada departamento.

Inc. 2.º Son estos los *jueces especiales de apelacion*. Son tan jueces letrados como pueden serlo los del crimen. Sus atribuciones no son mas que esas de apelacion. Los hai en Santiago i Valparaiso creados por el Presidente de la República por decreto de 22 de Febrero del 76.

A propósito de este decreto, el N.º 2.º va contra la lei, al decir que los secretarios de éstos deben ser nombrados por los Gobernadores a propuesta de los respectivos jueces. Tales secretarios son como cualquiera otros secretarios comunes de juzgados i el art. 338 de la lei de tribunales establece la manera de nombrarlos.

El Gobierno lo comprendió así i por decreto de 13 de Abril de 1903 dijo: que «era aplicable a los secretarios de los juzgados de apelacion de Santiago i Valparaiso la disposicion del art. 338». Se entabló entonces una contienda de competencia porque esos jueces no querian renunciar a los derechos conferidos por el decreto del 76, ignorantes quizas de que los decretos no son leyes sino medios de hacerla cumplir. La Corte Suprema confirmó este decreto de 1903, declarando que el del 76 no era válido.

Hai ademas otras disposiciones especiales que les confieren a estos jueces otras facultades: la *lei de 14 de Enero del*



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

82: el conocimiento en única instancia de los juicios de comercio cuya cuantía no exeda de \$ 200. Esta facultad es privativa i no preventiva.

I el art. 150 del Código de Minas que encomienda a los jueces de letras «la facultad de delegar en estos de apelacion la recepcion de la prueba en los juicios de minas». Estos dos preceptos no han sido derogados por el Código de Procedimiento Civil.

ART. 39. El turno es para radicar en un juzgado determinado los asuntos que se promueven dentro de la semana. Siempre un asunto cualquiera estará en el juzgado de turno.

Esta disposicion no está vijente en absoluto en todos los departamentos. La *lei núm. 892, de 13 de Enero del 97*, modificó esta disposicion. Se vió que esta se prestaba a abusos que acarrecaban serias perturbaciones en el servicio porque todo aquel que tuviera un asunto que ventilar que no le fuera mui urgente esperaba que estuviera de turno el juez que mas le simpatizara. Resultado que los jueces serios, honrados i laboriosos que consagraban todos sus esfuerzos i actividad al cumplimiento de sus deberes, recibian como recompensa i estímulo un recargo considerable de trabajo. I sin embargo, las prerrogativas, la situacion privilegiada seguan siendo las mismas para unos i otros. Por esto esta lei, segun la cual las demandas se llevan a la secretaria jeneral de la Corte (si la hai), se clasifican por el secretario i presidente de ella i se distribuyen equitativamente en todos los juzgados. No se distribuyen dando las mas fáciles a unos i las mas deffíciles a otros, nó. Si hai, por ejemplo, 12 que consistan en acciones posesorias, reivindicaciones, etc., i son



«los los juzgados, se distribuirán 6 a cada uno; combinadas entre sí. Si se trata de un juicio de quiebra, que significa ya un gran trabajo, se verá qué juzgado fué el último que tuvo uno de estos i se le dará al que sigue.

Otra *lei* núm. 1072, de 14 de Setiembre del 98 dice: No están sujetos a las disposiciones de la lei de 13 de Enero las facultades de los jueces para proceder de oficio en determinados casos ni el conocimiento de los asuntos que tienen por objeto dar cumplimiento a resoluciones de otros juzgados (exhortos, cartas rogatorias, etc.) ni los asuntos de jurisdiccion voluntaria», casos en que ejerce la jurisdiccion el de turno. Estas se aplican a los civiles porque en materia criminal rije el Código de Procedimiento Penal.

Esto es natural, porque tratándose de estas escepciones, se requiere prontitud en el servicio.

De suerte, pues, que la regla del art. 39 tiene cabida en los departamentos donde no hai Corte en lo que se refiere a juzgados civiles i en todas partes a los juzgados del crimen porque no ha sido modificada por la lei de Procedimiento Criminal.

«Determinadas especies de causas».—Quiere decir que donde la lei, como en Santiago o Talca, por ejemplo, ha creado uno o mas juzgados en lo civil i uno o mas juzgados en lo criminal, no podrá distribuirse entre ellos el ejercicio de la jurisdiccion. «Especies de causas» no «determinadas causas» (causas civiles; causas criminales). Podrá hacerse la distribucion en Rengo, San Fernando, Iquique, etc., en que cada juez tiene la plenitud de la jurisdiccion criminal i civil.

Se llama «promover un asunto» iniciar la querrela, ins-



tar la accion judicial. Un juicio puede iniciarse por demanda, denuncia, etc.

ART. 40. Está derogado por el decreto de 19 de Enero de 1889. Esta lei creó tres categorías de jueces segun las condiciones para ser nombrados jueces letrados de simples departamentos, jueces letrados de cabecera de provincia i jueces letrados de departamentos donde hai asiento de Corte.

Dice así en su art. 1.º:

«Deróganse los arts. 40, 58 i 103 de la Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales i se reemplazare por los siguientes:

Art. 40. Para poder ser juez de letras se requiere:

- 1). Ciudadanía natural o legal;
- 2). Tener 25 años de edad;
- 3). Tener el título de abogado.

Se requiere ademas:

Para ser juez de departamento donde no está ubicada la capital de la provincia:

Haber ejercido por dos años la profesion de abogado.

Para ser juez de departamento donde está ubicada la capital de provincia:

Haber ejercido por seis años la profesion de abogado o servido por dos un juzgado de departamento.

Para ser juez de departamento donde tiene su asiento una Corte de Apelaciones:

Haber ejercido por nueve años la profesion de abogado o servido por cinco un juzgado de departamento o por dos uno de capital de provincia.

Art. 58. Para poder ser miembro de una Corte de Apelaciones se requiere:



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
VALPARAISO

- 1). *Ciudadanía natural o legal;*
- 2). *Tener 32 años de edad;*
- 3). *Tener el título de abogado;*
- 4). *Haber ejercido por 12 años la profesion de abogado o servido por 6 un juzgado de departamento o por 4 uno de capital de provincia o por 2 uno donde tenga su asiento una Corte de Apelaciones.*

Art. 103. Para poder ser miembro de la Corte Suprema se requiere:

- 1). *Ciudadanía natural o legal;*
- 2). *Tener 36 años de edad;*
- 3). *Tener el título de abogado;*
- 4). *Haber ejercido por 15 años la profesion de abogado o servido por 8 un juzgado de departamento o por 6 uno de capital de provincia o por 4 uno donde tenga su asiento una Corte de Apelaciones o por 2 el cargo de miembro de una de estas Cortes.*

Es aplicable a los miembros de la Corte Suprema lo dispuesto en los arts. 59 i 60.

El servicio de los cargos de relatores, promotores fiscales i defensores públicos se equipara al de los jueces de letras de la localidad respectiva para el cómputo de los años requeridos en esta lei para obtener los puestos judiciales.

Los servicios que prestan los abogados en cualquier otro puesto judicial se equiparan al ejercicio de dicha profesion para todos los casos indicados en esta lei.

Los relatores se equiparan a los jueces de departamentos en que hai Cortes, como puede verse.

Art. 41. Cualquiera que sea el crimen o simple delito



aunque la pena haya sido una simple multa, no podrá ser nunca juez el penado.

Hai algunas leyes complementarias de este artículo que dictadas con posterioridad, han venido a crear verdaderas incompatibilidades. Así: la del *31 de agosto del 80* dice: que «los que hubieren desempeñado los cargos de Presidente de la República, Ministros de Estado, Intendentes, Gobernadores i aun Secretarios de Intendencias *no podrán ser jueces letrados, ni miembros de las Cortes, etc.*, sino despues de tres años de haber desempeñado dichos cargos.» Esto es para evitar que esos funcionarios lleven odiosidades políticas a la administracion de justicia. Estos tres años se han considerado, sin embargo, como mucho tiempo: la lei aprobatoria del Código de Procedimiento Civil de *28 de Agosto de 1902* los restringió a uno.

La lei de 31 de Diciembre del 89 estableció diversas incompatibilidades por parentesco. Esta es una lei jen-ral de incompatibilidades; no se refiere sólo a la administracion de justicia. El art. 2.º dice que no puede haber parentesco por consanguinidad hasta el 4.º grado i por afinidad hasta el 2.º entre algun juez de letras i algun miembro de la Corte de cuya jurisdiccion depende el juzgado directamente. Se mira así por la correccion administrativa. Aunque este proyecto fué presentado sólo para las oficinas de hacienda se hizo extensivo a todos los ramos de la administración.

Ademas de estas, la Constitucion en el art. 21, tal como ha quedado despues de la reforma del 92 dice que «ningun diputado durante su período ni hasta seis meses despues de su terminacion» podrá ser juez porque no puede desempeñar cargo o funcion pública retribuida i este lo es tal. I



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

en el art. 26 dice lo mismo respecto de los senadores. Se persigue separar en absoluto estas funciones, independizarlas.

Siguiendo este propósito tambien, para establecer la independencia de las comunas la lei de M. copia en su artículo 6.º a la pata esta disposicion que dejamos trascrita de la Constitucion: «Ningun municipal durante su período i hasta seis meses despues de su terminación, etc.»

ART. 42. Atribuciones conservadoras son estas de las garantías individuales, de la igualdad ante la lei.

El privilejio de pobreza se pide al juez que conoce de la causa porque este no es mas que un incidente de la causa principal i el juez que conoce de esta debe conocer de los incidentes. Lo mismo si un litigante pobre no puede valerse del abogado de turno porque defiende a la otra parte, por ejemplo, ocurre a pedir otro abogado, no al juez mas antiguo, sino al que conoce de la causa. Por eso dice que las designaciones especiales de los incisos 2.º i 5.º las hace el juez que conoce del negocio. *Pobre* es el que ha tenido privilejio de tal.

Ahora, si el demandante es el pobre y quiere pedir privilejio de pobreza para litigar ocurrirá ante el juez mas antiguo o ante la secretaria jeneral de la Corte, si la hai. Como este incidente es el que dá comienzo al asunto, puesto que estos pueden promoverse por incidentes, continuará el tribunal requerido conociendo de él.

ART. 43.—*Facultades disciplinarias.*—Son estas distintas de las de los jueces anteriores. Aquí un juez tiene que usarlas siempre por órden; allá despues de la 1.ª cualquiera de las otras dos indistintamente.



ART. 44.—*Otras facultades disciplinarias.*—Estos dos medios se usan en casos diversos: se usará el del número 1.º cuando se ve claro que son conceptos que envuelven injurias gratuitas, sin objeto, debidas a la exitacion producida en la lucha judicial i cuya difusion i publicidad son innecesarias; se usará el del número 2.º cuando siquiera le asiste la duda al juez de que esos pasajes o vocablos abusivos puedan ser de utilidad para la defensa. Sucede muchas veces, i esto lo vemos en muchos casos, que es indispensable valerse de espresiones enérgicas i aun groseras para pintar dando todo el colorido que es necesario a la realidad de una situacion: la simple descripcion hecha en términos delicados, prudentes en la intencion i cultos i decentes en la forma, resulta pálida ante la verdad de los hechos. Es entonces, cuando el vocable soez, obsceno se impone como el único que pueda reflejar con exactitud i fidelidad la inmundicia i miseria del pasaje que se presenta, cuando el juez echa mano de este 2.º medio. Esas espresiones son indispensables que el juzgado las oiga para que se de cuenta de lo ocurrido, pero, en nombre de la reputacion i de la honra de algunas de las partes o de las dos, no conviene que se hagan circular, que anden en bocas de todo el mundo. Entonces se tarjan i se archivan.

N.º 4.º—Por una circular se hace saber en todas partes la suspension del abogado.

ART. 46,—Este artículo está modificado por la lei N.º 45 de 4 de Julio del 93. La reforma consiste en que, segun el artículo 6.º, estas visitas *deben* hacerse una vez cada tres años por lo ménos i no como dice este artículo 46, «cuando lo crean conveniente».



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Cuando por excesivo trabajo sea un perjuicio para el servicio hacer estas visitas, la Corte respectiva les nombrará suplentes haciéndolo presente al Presidente de la República.

Art. 47.—Esto es avocamiento.—La regla es la del art. 7.º.

Art. 49.—Hai contradiccion aparente entre este artículo i el anterior en la designacion del turno. Esta palabra turno, de que no habla el artículo 48, es la que trae la oscuridad. El turno es semanal. Empieza el Juzgado mas antiguo. El turno establecido en las Cortes es tambien el de antigüedad.

Art. 50.—Los abusos que pueden reprimir por si mismos los reprimiran; en otro caso dictaran las providencias necesarias a las autoridades competentes. Deben concurrir todos los jueces en lo criminal i las reclamaciones se hacen por los procesados a los jueces que conocen de sus causas. Si el Sábado es feriado se hace el Viérnes, si este lo es tambien se hace el Juéves, el último dia hábil de la semana. Así lo han declarado las Cortes de Apelaciones y Suprema.

Estas visitas se hacen a las cárceles i lugares de detencion (reos procesados). Esta práctica viene de las leyes mas antiguas; las leyes españolas las prescribian. Es esta una de las garantias mas preciosas de la seguridad personal. El artículo 131 de la Constitucion dice que «ninguna orden de arresto puede prohibir que el reo se ponga en contacto con el majistrado respectivo», que lo visite este. I el artículo 149 del Código Penal sanciona su infraccion, en su N.º 3.º y C. de P. P. tambien.

Hai un auto acordado de la Corte Suprema, de 25 de



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Noviembre del 72, que reglamenta estas visitas. Dice lo que deberán decir en el acta los jueces de letras despues de practicarlas: 1) el nombre i apellido de todos los individuos que hubiesen ingresado desde la última visita; 2) el delito o falta porque estuvieran procesados o condenados; 3) la autoridad que está a su cargo etc...

ART. 51. N.º 3.º Esto tiene por objeto activar la administración de justicia. De estos estados uno es de causas criminales. Contienen: 1) número de órden de la causa; 2) nombre de los litigantes; 3) materia del juicio; 4) fecha de la iniciación de la causa; 5) fecha de la última providencia i 6) estado actual de ella.

En las causas civiles el juez desempeña un papel de lo mas pasivo. Debe dejar a las partes, que son dueñas de llevar las cosas como se les ocurra, que se den tiempo para lo que quieran i como se les dé la real gana. Salvo cuando la causa está en estado de sentencia en cuyo caso puede apremiarlas. Casi lo mismo se puede decir tratándose de causas criminales en que deban proceder a petición de parte.

Pero tratándose de causas criminales en que pueden proceder de oficio, la cosa es diferente: deben marchar ligero tanto porque es indispensable dar una satisfaccion pronta a la sociedad ofendida cuanto porque puede el reo ser inocente, caso en que sería injusto i desmoralizador tenerle retenido.

Fuera de estos estados hai que agregar otros. La lei de 29 de Marzo del 37 dice en su artículo 4.º que «en toda causa criminal en que haya conocido la Corte de Apelaciones por apelacion o consulta, el juez *a quo* pasará a la Corte cada dos meses por medio de los secretarios un certificado



de haberse ejecutado las sentencias en que esas Cortes hayan conocido». Son así esos certificados por ejemplo: «Causa núm. tanto.—Absuelto el reo X. por la Corte, fué puesto en libertad en tal fecha».

De los alcaldes

El párrafo este que se refiere a los Alcaldes está completamente derogado por leyes posteriores. Ya éstos no tienen el papel que la lei de tribunales les conferia.

TÍTULO V

De las Cortes de Apelaciones

De su organizacion i atribuciones

ART. 55. Veamos las modificaciones que ha experimentado este artículo. Hoy por hoy tenemos 7 Cortes de Apelaciones en la República, a saber:

La de Iquique, creada por la *lei de 15 de Noviembre de 1884*. Le dió esta lei jurisdiccion sobre las provincias de Tacna i Tarapacá; pero una posterior, de *12 de Julio de 1888*, amplió ésta, haciéndola estensiva a los departamentos de Tocopilla i Antofagasta. El departamento de Taltal quedó radicado en la de Serena. Es el único caso que se conoce de departamentos que, separados de la provincia, pertenezcan a la jurisdiccion de una Corte.

Esta Corte fué creada con residencia en Iquique; pero poco ántes del 91 (89) el Excmo. Señor Balmaceda la trasladó a Tacna; mas tarde la Junta de Gobierno la volvió a Iquique i por fin el Gobierno la llevó de nuevo a Tacna.



en donde reside hoi dia. Consta de cinco miembros i un fiscal.

La de Serena, creada por *lei de 26 de Noviembre de 1845*. Su jurisdiccion primitiva se estendia a las provincias de Atacama i Coquimbo, ampliándose al departamento de Tal-tal por *lei de 12 de Julio de 1888*. Consta de 5 miembros i 1 fiscal.

La de Valparaiso, creada por *lei de 2 de Febrero de 1892*. Se le dió jurisdiccion sobre Aconcagua, territorio de Magallanes e islas de Juan Fernández. Pero, por *lei de 8 de Octubre de 1898*, núm. 1100, la provincia de Aconcagua volvió a la Corte de Santiago a que pertenecia.

Esta lei fué mui curiosa; por imprevision, por falta de atencion, tal vez, se empleó un término impropio de donde siguieron dificultades. Promovida por mensaje del Ejecutivo, decia así: «La Corte de Santiago conocerá de las causas del territorio de Aconcagua salvo de las que actualmente conoce la de Valparaiso». Posteriormente, con motivo de un nombramiento de oficial del registro civil o algo parecido, para lo cual se habia reunido la Corte, alguien llamó, entonces, la atencion sobre esta lei en virtud de la cual no tenia aquella ninguna atribucion en estos asuntos, pues, en ella solo se hablaba de causas. Efectivamente, considerando esta verdad, se detuvieron en su tarea. Pero el propósito del lejislador no habia sido este indudablemente. Por esto por *lei de 14 de Enero de 1899*, núm. 1170 se completó la anterior, manifestando bien claro la verdadera intencion que esta envolvia. Decia: agrégase a la lei núm. 1100 el siguiente inciso: «Corresponderá a la Corte de Santiago toda la jurisdiccion del territorio de Aconcagua, etc.»



Consta de 5 miembros i 1 fiscal.

La de Santiago, creada por el art. 153 de la Constitucion del año 23. Fué primitivamente la única en toda la República, estendiéndose, por lo tanto, su jurisdiccion a todo Chile. Sabemos que las constituciones posteriores del 28 i 33 dejaron subsistentes estas disposiciones administrativas, judiciales, etc. Poco a poco se fué cercenando su jurisdiccion. Vinieron luego las de Concepcion i Serena que le quitaron algunas provincias; luego Talca que le quitó solo Talca i por último Valparaíso. Su jurisdiccion comprende hoy las provincias de Aconcagua, O'Higgins, Santiago, Colchagua i Curicó. Por lei núm. 1851, *de 14 de Febrero de 1906*, consta de 16 miembros i se divide en 4 salas: Tiene 2 fiscales.

La de Talca, creada por *lei de 28 de Julio de 1888*. No ha tenido modificacion respecto a su territorio jurisdiccional: Talca, Linares, Maule i Ñuble. Se creó con 5 miembros i 1 fiscal; pero esta lei núm. 1851 dice en su inc. 2.º que la Corte de Talca se compondrá de 7 miembros i se dividirá en 2 salas. Siempre 1 fiscal. Una de estas salas, funcionará con 3 i la otra con 4, sorteándose las causas civiles. Las causas criminales para las cuales se requieran 4 miembros iran a esta de 4.

La de Concepcion, creada por la misma lei que creó la de Serena, *de 26 de Noviembre de 1845*. Le dió esta lei como jurisdiccion todo el territorio de Maule al Sur. Pero la que creó a Talca le dejó el de Concepcion al Sur. Hoy solo le queda Bio-Bio, Concepcion, Arauco i Malleco, pues, ha sido cercenada por la de *14 de Febrero de 1906* que crea la de Valdivia.



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Era Corte de una sala, pero una lei posterior de **2 de Febrero de 1898**, en su art. 10, le dió 8 miembros, 2 salas i 2 fiscales.

La de Valdivia, creada en el 3.^o inciso de la lei de **14 de Febrero de 1906**. Dice: «Créase una Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad de Valdivia que se compondrá de 5 miembros i 1 fiscal. El distrito jurisdiccional de esta será el territorio que comprende Cautin, Valdivia, Llanquihue i Chiloé.

Resúmen: Cortes de una sala: Iquique, Serena, Valparaíso i Valdivia. Cortes de 2 o mas: Santiago 4; Talca 2; Concepcion 2.

ART. 56. Las Cortes no tienen, pues, un territorio determinado de jurisdiccion. Son tribunales de 1.^a instancia que ejercen su jurisdiccion en el territorio que les asigna la lei.

Habria sido mas propio del Código fijar las salas i no los miembros porque estos van cambiando segun las necesidades. La de Santiago funciona como la de Concepcion. Es natural que la de Talca funcione lo mismo porque la lei no dijo nada de ella al respecto.

Diferencias entre las Cortes establecidas por este Código i las actuales debidas a las leyes posteriores: las antiguas eran tribunales autónomos, independientes; habia en Santiago dos salas i para cada una de ellas se nombraban jueces a firme que nada tenian que ver en la otra; solo para casos escepcionales se reunian. Ahora es un solo tribunal compuesto de 16 miembros que accidentalmente se dividen para hacerse cargo, como comisiones, de algunos asuntos.



No hai empleados adictos especiales de cada sala. Cada uno de los empleados lo es de todas ellas.

Los presidentes se renuevan de Enero a Enero, segun la antigüedad. I, como se determina esta antigüedad o, mejor dicho, como se suceden? Por ejemplo la sala consta de 5 miembros; cuando el turno va en el 5.º muere el 2.º miembro i es reemplazado por uno nuevo. Despues del turno del 5.º a quien corresponde la presidencia, al núm. 1.º o al 2.º que es ménos antiguo? Esto se ha prestado a dificultades serias. Ya las hubo en la Corte Suprema i hubo entónces dos interpretaciones de la lei: unos decian que, atendiéndose a la letra de ella, correspondia al 2.º, pues, dice terminante i claramente «por órden de antigüedad». Los otros, es decir, los contrarios de esta doctrina, que es la antigua, sostenian que correspondia al 1.º, pues siendo en la Corte Suprema 7 los miembros i sorteándose los cuales de Enero a Enero les correspondia a cada uno un turno cada 7 años. Quizas..... Han hablado los doctos i debemos callar resignados.

La 1.ª reforma del art. 56 fué la de la *lei de 19 de Enero de 1889* que dijo que constaria de 15 miembros i se dividiría mensualmente por sorteo en tres salas. Para asuntos delicados se llegaría a formar 4. La de 2 de Febrero de 1892 dice que se compondrá de 12 miembros i se dividirá en dos salas o en tres cuando las necesidades lo exijan. La designacion de los miembros que deberán componer cada sala se hace por sorteo anual. Tendrá 2 fiscales, 5 relatores, 5 secretarios i 2 oficiales de sala.

El inciso 4.º no tiene, pues, razon de ser. Se aplicará para todas las Cortes la regla del inc. 2.º.



El orden de antigüedad se cuenta desde que se es miembro de la Corte de que se trata aunque haya desempeñado ántes 20 o mas años las funciones de tal en otra Corte.

ART. 57.—Esta disposicion está mal colocada aquí porque es una disposicion transitoria, pues, estaba destinada a dar paso a la lei nueva. Estos rejentes eran funcionarios antiguos desde la real Audiencia de la cual son sucesoras las Cortes.

ART. 58.—Está modificado por la *lei de 19 de Enero del 89*. No se confunda esta con la otra lei de 19 de Enero del 89 que se refiere al funcionamiento de las Cortes.

ART. 60.—Este art. solo se refiere a los miembros de estas Cortes. La *lei de 31 de Diciembre de 1889* dice que «no puede haber parentesco hasta el 4.º grado consanguíneo i hasta el 2.º por afinidad entre los miembros de la Corte de Apelaciones i los de la Corte Suprema ni entre aquellos con los jueces de letras dependientes de su jurisdiccion». No habla sino de miembros por lo cual no se encuentran comprendidos en ella los fiscales.

Ahora, si durante su período dos miembros contraen parentesco de afinidad, la cuestion se resuelve por el art. 170 que dice que el que contrae el matrimonio será separado inmediatamente de su cargo. Esta lei debe ser solterona.

ART. 61.—No es esta cuestion propia de un código como este, pues, esto depende de las necesidades. Hoy no tiene valor ninguno esta disposicion. Actualmente, las Cortes tienen los siguientes relatores i secretarios: la de Iquique i Serena: 1 secretario i 1 relator; la de Valparaíso: 1 secretario i 2 relatores; la de Santiago: 2 secretarios i 6 relatores; la de Talca: 1 secretario i 2 relatores; la de Concep-



cion: 2 secretarios i 4 relatores; la de Valdivia: 1 secretario i 2 relatores.

ART. 62.—Porteros.

ART. 63.—Derogado por tres leyes posteriores: *19 de Enero del 89; 2 de Febrero del 92 i 14 de Febrero de 1906.*

ART. 64.—No tiene ya aplicacion. La organizacion de las Cortes es enteramente otra, como lo hemos visto. Hoi el trabajo se distribuye de la manera siguiente en Santiago i así en todas las Cortes de mas de una sala: Cada Corte deberá formar el Sábado una lista de las causas que deberá ver en cada uno de los dias de la semana entrante, asignándole a cada una un número por órden de antigüedad. En la tabla (lista) se dirá: «Día tanto se verá causa núm. tanto». Estas tablas son formadas por el presidente de la Corte i una vez hechas tantas tablas como salas tiene la Corte se sortean para saber a que sala corresponde cada una. Las tablas se colocan despues de sorteadas i de firmadas por el secretario en la puerta de su sala respectiva. Esta es la publicacion oficial. El portero, (oficial de sala) coloca en la puerta la letra o número que corresponde a la causa que se va a ver para anunciar de esta suerte al abogado respectivo. Esto es tan importante que si el portero u oficial de sala omite el anuncio de este modo hai recurso de casacion en la forma, nulidad de la sentencia pronunciada por no haber habido defensa.

Las causas pendientes continúan en el tribunal que conoce ya de ellas. Si terminada la semana, de las diez causas de una tabla, por ejemplo solo se han visto tres las otras van a la masa comun para ser sorteadas de nuevo.

Los relatores se sortean con las causas.



El inc. 4.º del art. 1.º de la *lei de 2 de Febrero de 1892* dice: «el ejercicio de las funciones de estos empleados será arreglado por el tribunal *como lo estime mas conveniente para el buen servicio*». Los relatores toman las causas de que ya conocen i las nuevas se las distribuyen poniéndose de acuerdo. El presidente es, entonces, el que les dá las causas que ellos se distribuyen.

Las tablas se sacan de un libro o «rol» que es la lista de las causas en estado de apelacion. Estas se colocan en la tabla segun el orden de antigüedad, salvo que algunas tengan motivos de atencion preferente. Tambien pueden agregarse a las tablas las causas que durante la semana aparezcan con circunstancias especiales que las hagan ser atendibles de preferencia, como ser una causa criminal. El presidente dice, entonces, «agréguese a la tabla de tal dia», de mañana, por ejemplo. Estas se agregan en primer lugar, pues, en el último pueden no alcanzarse a ver.

Los trámites de algunas causas que por falta de estos no estan en estado de verse por el tribunal, corresponden a la sala en que está el presidente de la Corte. La llaman por esto la «sala tramitadora», que es mui propio. Dan cuenta de ellos los relatores o secretarios.

¿Cómo se distribuyen el trabajo los secretarios? Como lo acuerda el Tribunal. Siempre recurrimos al art. 1.º de la *lei de 1892*. Se ha fijado para ellos turno mensual.

El trabajo de los fiscales, que no son miembros dependientes del tribunal desde que pertenecen al ministerio público, se distribuye por el tribunal pero «con audiencia de ellos». En la práctica se dan todos los negocios de tal secretario a tal fiscal. Esto tuvo por orijen el hecho de que



en la Corte de Santiago se encontraba hace algun tiempo un lazo de parentezco entre uno de los secretarios i uno de los fiscales i, aunque esto no significara nada, por un sentimiento de escrúpulo judicial se dió todos los asuntos de ese secretario al otro fiscal no pariente i los del otro secretario a ese fiscal. Quedó la práctica así.

En la Corte de Concepcion se ha hecho el turno de los secretarios i fiscales por mes.

Respecto de los ministros, está vijente para su distribucion la *lei del 92* que dice que el sorteo se hará anualmente. La *lei de 1906* no la ha modificado. Respecto a que este sorteo se hace públicamente viene de la *lei del 89* aun vijente en este punto, (19 de Enero). La disposicion del turno, consignada en el art. 12 de esta lei, está modificada por la del art. 1.º de la del 92.

ART. 66. Se trata aquí de la Corte de Apelaciones de Santiago i no de cualquiera Corte. Solo en dos casos se reúne toda la Corte: en el art. 116 tratándose de hacer efectiva la responsabilidad civil o criminal de un miembro de la Corte Suprema, conocerán en segunda instancia las dos salas (hoi 4) de la Corte de Apelaciones reunidas en una sola, etc., i en el del art. 259, tratándose de la recusacion de uno o mas miembros de la Corte Suprema.

ART. 67. Núm. 1.º—Segun la letra de este número las Cortes de Apelaciones no son competentes para conocer de las Apelaciones sobre asuntos no contenciosos, pues este artículo habla de *causas*. Esto ha sido sencillamente un olvido, una falta de tino del lejislador, falta que estamos encontrando a cada paso. La jurisprudencia ha enmendado esta omision, dando tambien la apelacion de ellos a las



Cortes de Apelaciones. No podía ser de otro modo: sabemos que de esos actos se puede apelar; pero el Código omite decir cuál es la autoridad competente para conocer de esta apelación; deja entónces a los ciudadanos en la triste situación de poseer un derecho, sin el medio para ejercerlo. Por otra parte, lo corriente, lo normal es que son los tribunales inmediatamente superiores en la jerarquía judicial los que van conociendo de estos recursos. A estas cortes corresponde entónces esta competencia. El nuevo Código de tribunales ha reparado esta falta.

Núm. 2.º Estos recursos de casacion son tambien en la forma. Comienzan los recursos de casacion en el fondo cuando se trata de sentencias de las Cortes de Apelaciones.

Núm. 3.º Por dos motivos principales se da a las Cortes el conocimiento en primera instancia de estos asuntos en que intervienen personajes de tal categoría:

1) Para evitar la influencia que estos puedan ejercer sobre los jueces; la lei quiere que los litigantes luchen en igualdad de condiciones. Se podrá alegar que esta influencia se puede tambien ejercer respecto de los miembros de las Cortes: es cierto, dentro de lo humano es perfectamente admisible i natural; pero es mas difícil: aquí ya se trata de varios hombres i no de uno i, por otra parte, la seducción es mas posible en los funcionarios mas inferiores.

2) Para resguardar la dignidad, el decoro que invisten estos funcionarios. El Presidente de la República, por ejemplo, no podría litigar ante un juez de distrito.

Este fuero es irrenunciable; la renuncia hecha por ámbas partes no produce efecto. Porque hai una consideracion de orden público que la hace nula, la segunda.



Si uno de estos personajes interviene en un acto no contencioso ¿quién conocerá de este? El juez de letras porque tambien habla de *causas* este inciso.

Ajentes diplomáticos, es decir, los Ministros Plenipotenciarios, embajadores, encargados de negocios i demas funcionarios que representan la soberanía de la nacion; no los cónsules que son simples agentes comerciales. No se comprenden entre agentes diplomáticos los demas empleados subalternos de ellos.

Vicarios son delegados del obispo o arzobispo que ejercen la potestad administrativa i judicial; pero sólo la primera cuando hai a la vez *provisores*, que son los funcionarios eclesiásticos que especialmente están a cargo de este ramo. Estas son ejercidas en la diócesis.

Los *capitulares* son los que gobiernan la diócesis en sede vacante.

Pasando a otra cosa, porque basta ya de latas, se trata de demandar a un juez de letras por 50 pesos ¿a quién se dirige uno para entablar la demanda? A otro juez de letras porque tambien estos tienen fueros segun los cuales no pueden ser demandados ante jueces inferiores. Pero ya cuando se trata de hacer efectiva su responsabilidad civil o criminal resultante del ejercicio de sus funciones ministeriales, es otra cosa: de éstas conoce la Corte de Apelaciones porque se trata de acusaciones interpuestas en contra de ellos en cuanto funcionarios. De éstas conocen en primera i segunda instancias, los miembros de estas cortes en la forma que prescribe el artículo 4.º del Código de Procedimiento Civil que dice: que en el caso de este art. 67 conocerá en primera instancia un miembro de la Corte de Apelaciones i en 2.ª toda la Corte, con escepcion de ese miembro.



De suerte que se podría ampliar el núm. 1.º de este artículo diciendo que «conocen en segunda instancia, de las causas en que han conocido en primera, los respectivos jueces de letras o alguno de sus miembros».

En esta Corte, i para este efecto de conocer uno de sus miembros en primera instancia, hai turnos de causas no de tiempo, de la misma manera que pasa en la Corte Suprema.

Este artículo 4.º tiene la escepcion del art. 987 del mismo Código de Procedimiento Civil que dice que «en los juicios de minas, posesorios, sobre aguas, particiones i en general, en todos aquellos que se tramitan breve i sumariamente no se toma en consideracion este fuero». Esto es natural porque estos juicios, como lo dice el artículo, son breves i sumarios i requieren rapidez i oportuna atencion de parte de la justicia. No sería lójico, en consecuencia, esperar que esto llegara a la Corte respectiva, que pudiera estar distante.

Tampoco se toma en consideracion el fuero en los concursos (art. 572 del C. de P. C.) cuando este figura entre los acreedores del fallido, pues estos pueden ser muchos i sería inconveniente e injusto que por uno se perjudicaran tantos; pero subsiste en el caso de que sea el fallido el poseedor de este privilejio.

Los intendentes i gobernadores tienen mas inmunidades que el mismo Presidente. Ya no pueden ser mas diablos;... Este puede ser acusado por delitos comunes i en caso de ser condenado el Congreso puede deponerlo según los arts. 27.º i 65 de la Constitucion.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

En tanto que los intendentes i gobernadores no pueden ser acusados criminalmente ni por delito comun ninguno ántes de que pase la acusacion por el Consejo de Estado, que declarará si ha lugar o nó a ella.

Este es el fuero constitucional. Dura el tiempo de las funciones del intendente o gobernador. I sobre esta materia hai una discrepancia de opiniones entre el Consejo de Estado i la Corte Suprema. Segun el primero, el fuero de que se trata termina siempre con la cesacion del cargo. Segun la segunda, el fuero subsiste cuando se trata de juzgárseles por actos funcionales.

Respecto de los agentes diplomáticos podemos decir que están sujetos a la doctrina de la extraterritorialidad segun la cual sólo los Tribunales de la República pueden juzgarlos por los delitos cometidos en el pais donde se encuentran, pues se les considera en territorio chileno.

I ¿cómo entonces se habla en este artículo de juicios en contra de ministros extranjeros que están en el mismo caso que los nuestros? Porque esta disposicion reza en los casos en que, segun las reglas del Derecho Internacional, podamos juzgarlos. Si un ministro extranjero, por ejemplo, demanda a un nacional, da ocasion a que rija este artículo, pues, el solo hecho de su recurso a la autoridad judicial ordinaria significa claramente la renuncia de su privilejio, el sometimiento a la justicia del pais. Estados Unidos ha prohibido terminantemente a sus ministros que renuncien a este privilejio en ningun caso.

Para terminar con este art. 67 agregaremos algunas otras funciones que por leyes especiales se confieren a estas cor-



«Corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago conocer en primera instancia de las causas para hacer efectiva la responsabilidad civil o criminal de los miembros del Tribunal de Cuentas» (art. 29, lei de 20 de Enero del 88).

Segun el art. 35 de la misma «los miembros de la Corte de Santiago son llamados por orden de antigüedad a integrar este tribunal a falta de los suyos.

En jeneral, las Cortes conocen en segunda instancia sobre las reclamaciones de eleccion de municipales de que conocen en primera los jueces (art. 15 de la lei de 22 de Diciembre de 1891).—Aunque parece a primera vista que esto no es nuevo i que está comprendido en la regla del núm. 1.º del art. 67, es esto, sin embargo, un caso especial distinto de los consignados en este núm. 1.º pues, se trata aqui de asuntos de orden político i a no haberlo contemplado especialmente la lei, nos habríamos encontrado con una seria dificultad al presentarse esta ocasion, pues al recurrir confiadamente a este núm. 1.º habríamos recibido el silencio mas absoluto sobre este punto.

Segun esta misma lei, correspondía a la Corte Suprema conocer de las reclamaciones que cualquier ciudadano puede entablar contra los acuerdos o resoluciones ilegales de las municipalidades para declarar si subsisten o no. Esto en caso de que la Municipalidad desestime estas reclamaciones.

La lei de 28 de Agosto de 1902, promulgatoria del C. de P. C. en su art. 6.º dice, derogando esta disposicion, que corresponde a las Cortes de Apelaciones respectivas conocer sobre esas reclamaciones.

Corresponde por este mismo art. 6.º de esta lei a las



Cortes de Apelaciones conocer de los vetos que los intendentes, gobernadores o subdelegados, presidentes de municipalidades, pueden oponer a las resoluciones o acuerdos de éstas cuando los consideren contrarios al interes u orden públicos i que ántes correspondia a la Corte Suprema tambien.

Ademas la atribucion que les confiere el art. 5o de la lei de Municipalidades i que dice: «Conocerán en 2.ª instancia las C. de A. de las reclamaciones que hagan los particulares contra las tasaciones de los inmuebles por las municipalidades para el cobro de las contribuciones». (1.ª J. L.)

Conocen tambien en segunda instancia, segun el art. 37 de la lei de elecciones de 20 de Agosto de 1890, de las resoluciones del juez de letras acerca de la exclusion de los registros de algunos ciudadanos.

Conocen tambien en 2.ª instancia, segun la misma lei, de las inclusiones, exclusiones i excusas de los miembros de las juntas electorales.

1. por fin, conocen en 2.ª instancia, ademas, de las exclusiones o inclusiones de los ciudadanos en las inscripciones en los registros electorales, i de que conocen en primera la junta de Alcaldes (art. 40). El ciudadano recurrirá en primer lugar al juez de letras i en apelacion de las resoluciones de los alcaldes i del juez a la respectiva corte.

ART. 74. —Hai un vacío en esta parte, pues no hai respecto de las cortes las facultades correctivas que la lei confiere a los jueces en el art. 44. Las dos primeras facultades de este artículo no estan consignadas tratándose de las Cortes. Es esto evidentemente un vacío.



ART. 75.—En el nuevo proyecto esta funcion corresponde a la Corte Suprema,

La *Lei de 10 de Octubre de 1898* agrega al art. 70 un número 5.º: «Imponer la suspension del juez hasta por 4 meses con medio sueldo». Este art. 75 sólo se refiere a los 4 números antiguos del art. 70, pues, este 5.º es posterior i no ha podido contemplarlo, en consecuencia, el lejislador al consignar esta disposicion del 75.

ART. 76.—A estas personas se les suspende hasta por 60 dias i no por cuatro meses como a los jueces porque seria un absurdo i porque a mas se aplica el mismo razonamiento anterior.

ART. 77.—No quiere esto decir lo que parece: significa que cada cinco años, a lo ménos, es el mayor plazo que puede dejarse pasar sin haber hecho estas visitas.

Para este cometido no hai turno de ministros: lo hará el mas apropiado, el que parezca mas capaz.

Se impondrá de la marcha de la administracion de justicia por todos los medios que «conceptúe prudentes». Él fallará como si fuese la Corte. Examinará los archivos i recojerá cuanto dato crea conducente a su objeto. El Presidente sólo decreta la visita sin que pueda indicarle para tal o cual objeto. Este es otro vacío; la lei debió conferirle al Presidente la facultad de poder señalar para qué hecho concreto i determinado se decreta la visita extraordinaria.

ART. 79.—Dará cuenta por escrito al tribunal el ministro visitador de todo lo que hubiere notado con ocasion de la visita, particularizándose sobre el estado de la administracion de justicia en cada departamento, las medidas que



hubiese dictado, las corruptelas o abusos que ha advertido, etc.

ART. 80.—Sus medidas se ejecutarán desde luego, pero son revocables por la Corte.

ART. 81.—El dictámen del fiscal tiene siempre por objeto intentar las acciones populares.

En esta lei hai otro vacío: no ha facultado a las Cortes para decretar visitas extraordinarias. Pero esto se ha subsanado por la lei 45, de 4 de Julio de 1893 que dice:

ART. 1.º Los Tribunales Superiores de Justicia decretarán visitas extraordinarias por medio de alguno de sus ministros en los juzgados de su respectiva jurisdiccion siempre que el «mejor servicio judicial» lo exijiere. Esta es la regla jeneral.

ART. 2.º El Tribunal ordenará especialmente estas visitas en los casos siguientes:

1) Cuando se tratare de la investigacion de hechos o de pesquisar delitos que puedan afectar a las relaciones internacionales de la República i de los que corresponda conocer i juzgar a los tribunales de justicia.

2) Cuando se trate de la investigacion i juzgamiento de crímenes o delitos que produzcan alarma pública i exijan pronta reparacion por su gravedad i perjudiciales consecuencias.

3) Siempre que sea necesario investigar hechos que afectan a la conducta de los jueces en el ejercicio de sus funciones i cuando hubiere retardo «notable» en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de dichos jueces.

ART. 30.—Las Cortes deberán expresar en cada caso en que decretan visitas el objeto determinado de ellas i podrán,



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

ademas, autorizar al Ministro visitador para que ejerza en el juzgado en que se practique dicha visita las atribuciones disciplinarias que confiere la lei de Tribunales a los visitadores.

Las facultades del Ministro en visita en los casos a que se refiere el art. 2.º, serán las de un juez de 1.ª instancia i contra las resoluciones que dictare en los procesos a que hubiere lugar en dichos casos podrán deducirse los recursos legales como si se dictaren por el juez letrado del departamento.

Cuando el Ministro visitador debiere despachar causas, el Tribunal respectivo designará las que deben ocuparlo, quedando todas las demas a cargo del juez de letras del departamento.

ART. 4.º—Las Cortes señalarán el tiempo de duracion de la visita i podrán prorrogarlo o restrinjirlo así como conferir a otro Ministro el encargo de continuarla, siempre que así lo estimaren conveniente.

ART. 5.º—El Ministro visitador dará cuenta de su visita siempre que lo exija el tribunal i a lo ménos mensualmente. Terminada que sea, informará sobre lo que ha hecho en ella i la Corte lo avisará al Presidente de la República.

Si la visita hubiere sido decretada por la Corte Suprema la de Apelaciones d la que se halla insinuado, requerido, ordenado que constituya en visita a alguno de sus miembros, dará cuenta tambien a dicha Corte Suprema del informe del visitador.

Cuando la Suprema constituya en visita a alguno de sus miembros, lo que solo podrá hacer en negocios



de su competencia, dará conocimiento del informe del visitador al Presidente de la República para los fines a que corresponda.

ART. 6.º—*Las Cortes de Apelaciones dispondrán que los jueces de apelaciones, en los departamentos en que los haya, i los de letras en lo civil en los demas, practiquen visitas en los juzgados de subdelegacion i de distrito una vez cada tres años por lo ménos.*

Los jueces visitadores darán cuenta de su visita a la Corte de Apelaciones respectiva, esta a la Suprema i al Presidente de la República.

La Corte de Apelaciones respectiva, al decretar la visita, designará al juez que haya de practicarla y fijará el tiempo de su duracion.

Si considerare necesario nombrar un reemplazante al juez visitador en el despacho de su juzgado, lo indicará así al Presidente de la República para que se le nombre suplente por el tiempo de la visita.—J. MONTT.—Rodriguez R.»

El Ministro en estas visitas ayudará al juez. En el decreto debe decirse qué causas tocan al juez i cuáles al Ministro. El Ministro actúa como juez de letras i no como Corte. Por esto de sus resoluciones hai apelacion.

Estados bimestrales, estados de las causas (art. 51).

La desidia del juez que se toma en cuenta, es la desidia en las causas en estado de fallarse.

El art. 169 del Código de Procedimiento Civil, inc. 3o, dice: «La sentencia definitiva en el juicio ordinario, deberá pronunciarse dentro del término de 60 días contados desde que la causa queda en estado de sentencia. Si el juez no



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

dictare sentencia dentro de este plazo será amonestado por la Corte de Apelaciones respectiva i si a pesar de esta amonestacion no espidiere el fallo dentro del nuevo plazo que ella le designe, incurrirá en la pena de suspension de su empleo por el término de treinta dias, que será decretada por la misma Corte».

Esto es en los juicios ordinarios; en los ejecutivos, posesorios i otros los plazos son mas cortos.

Art. 82. En el nuevo Código se dice: «funcionarios» i no «subalternos» porque subalterno parece referirse sólo a los empleados auxiliares. En realidad, a éstos debe referirse i así se ha entendido siempre porque es deprimir la personalidad de los jueces aplicarles esta disposicion. Pensar en que un individuo cualquiera pueda ir a la Corte i de palabra entablar quejas en contra de un juez i se verá que ponen a éstos en una condicion que no corresponde a su categoría.

El art. 165 del Código de Procedimiento Civil define las providencias: «Decreto, providencia o proveído es el que, sin fallar sobre incidente o trámite que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene sólo por objeto determinar o arreglar la *sustanciacion* del proceso».

La frase *de mera sustanciacion* está, pues, de mas.

Las Cortes pueden imponerse por dos conductos de las causas: por los relatores i por los secretarios. Los relatores de dos maneras pueden informar a las Cortes: *dando cuenta*, cuando se trata de asuntos que no estan puestos en tabla o *por relacion* cuando se trata de asuntos puestos en tabla.

Mientras una causa no pertenece a ninguna sala, de cualquiera solicitud, de cualquiera queja o incidente que sobrevenga deberá dar cuenta el relator a la sala tramitadora. I



es el relator i no el secretario el que las da porque esto requiere estudio de los antecedentes. Pues, hai que ver cuando corresponde a los relatores i cuando a los secretarios la informacion de las causas. Cuando esta supone análisis, conocimiento de los antecedentes corresponde a los relatores; cuando, por el contrario, se trata de providencias que se llaman *de cajon*, que no requieren estudio alguno sino que se dictan por la sola indicacion de la suma, corresponde a los secretarios. (Parece que fueran mas lesos éstos).

No es, pues, exacto lo que dice este artículo, pues, es necesario, además, que las providencias puedan dictarse por la sola indicacion de la suma. Las providencias dictadas en audiencia pública son las de los secretarios i se distinguen de las privadas en que aquellas llevan la firma de éstos, son como certificados; las privadas llevan las firmas de los Ministros: no aparece el relator porque éste no es Ministro de fé.

El art. 192 del Código de Procedimiento Civil modifica esto, pues, dice: «Toda resolucion de cualquier especie que sea, deberá espresar en letras la fecha i lugar en que se espida i llevar al pié la firma del juez o jueces que la dictaren o intervinieran en el acuerdo».

Los relatores dan cuenta al comenzar el despacho i a la hora en que comienza a funcionar la sala.

ART. 83.—Este feriado se refiere a las vacaciones; no a dias de fiestas aislados. El turno es por antigüedad.

El Ministro de turno puede convocar «*extraordinariamente*» al tribunal.



De los acuerdos de las Cortes de Apelaciones

ART. 84. Desde este artículo para adelante deben todos estudiarse en relacion con los del Código de Procedimiento Civil desde el 175 hasta el 193.

Asi este artículo debe relacionarse con el 175.

El inciso 2.º de este 84 está modificado por la *lei de 19 de Enero de 1889* (art. 10) sobre funcionamiento de Cortes.

ART. 85.—Ya hemos dicho que...«de mera sustanciacion» está demas.

ART. 86. Derogado por el art. 175 del Código de Procedimiento Civil que establece que sólo se necesitan tres. Está vijente sólo en materia criminal, pero hasta el 1.º de Marzo de 1907 en que entrará a rejir el Código de Procedimiento Penal.

ART. 87. «Votos uniformes»...e decir, que sean todos iguales en cuanto a las conclusiones i fundamentos de las proposiciones que se discuten, (art. 186 del Código de Procedimiento Civil).

Segun la *lei de 12 de Setiembre de 1851*—mui sabia—hai que simplificar las proposiciones para proceder a votarlas. No pueden votarse proposiciones complejas.

Lo mismo dice este art. 185 del Código de Procedimiento Civil.

Se votarán, primero, las cuestiones de hecho i despues las de derecho porque este es el orden lójico de los acontecimientos. Primero las mas comprensivas i despues las ménos en unas i otras, debiendo la minoría aceptar las decisiones de la mayoría como hechos incontrovertibles para la re-



solucion de las posteriores que tengan relaciones con ellas. Sólo así se pueden votar las causas, bien desmenuzadas.

Por ejemplo, se impugna un testamento por tres motivos; 1) el testador estaba demente al testar (cuestion de hecho); 2) uno de los testigos era inhábil (cuestion de hecho); 3) el heredero era indigno (cuestion de hecho). Segun la opinión de cada Ministro resulta; *A* cree está probado que el testador estaba demente; los otros que nó. *B* cree probado que el testigo era inhábil, los otros que no lo era. *C* cree ser cierto que el heredero es indigno; los otros que no lo es. Entónces, si se vota la cuestion compleja de sí es o nó válido el testamento, la unanimidad lo declara inválido desde que *A* vota la nulidad por demencia del testador, *B* por inhabilidad del testigo i *C* por ser indigno el heredero. Sin embargo, se ve muí claro que el resultado es engañoso; pues, descomponiendo la cuestion compleja en proposiciones simples, se llega a la conclusion contraria de que el testamento es perfectamente válido porque cada una de ellas quedará desechada en vista de que hai un solo Ministro que la sostiene i dos que la rechazan. Lo mismo resulta en las votaciones en que hai que apreciar cuestiones de hecho i de derecho, debiéndose votar primero las de hecho.

En la Corte Suprema se presentó el siguiente caso: con cuatro jueces se vió una sentencia condenatoria en lo criminal. Dos de estos jueces estuvieron por condenar al reo; uno por absolverlo de la acusacion i el otro por absolverlo de la instancia. Se estimó por la Corte que este no era el caso del art. 87, inc. 2.º porque no eran uniformes las opiniones de los dos jueces favorables al reo. Se llamaron, entónces, a otros dos jueces para resolver el empate i como éstos vota-



ron por la condena, el reo fué condenado. Entre tanto, esta resolución es profundamente ilegal, pues, las opiniones favorables al reo eran uniformes i, en consecuencia, hubo empate en la primera votacion, debiendo, entónces, ser el reo absuelto, en conformidad a ese inc. 2.º del art. 87.

Era uniforme la opinion de esos dos jueces, lo que no apareció en claro por estar mal tomada la votacion. La cuestion debió descomponerse en estas sencillas: ¿débese condenársele o nó? dos porque sí i dos porque nó; absuelto el reo. 2) ¿debe absolversele de la instancia o de la acusacion? En este caso concreto dos habrian votado tambien por la absolucion de la instancia, resultando que el reo no era condenado.

ART.—88. El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil nada dice de que «como jueces», por ser una redundancia desde que sólo han podido concurrir los jueces a la vista del negocio.

ART, 89. Se refiere a los dos tiempos: de la vista i del acuerdo. El acuerdo puede durar muchos dias.

«Ninguno de los jueces que hubieran concurrido como tales»... es necesario que el juez fuera tal al tiempo de verse i al de volarse. *Como jueces*...espresion que significa juez competente, conocedor del negocio.

Hai en este artículo deplorables vacios. Así, dejó sin resolver el caso de una *suplencia* i el de una *promocion*. Por ejemplo, interviene un Ministro como suplente: en este caso no le seria aplicable el artículo 89, desde que no ha sido tal en el momento de la vista del negocio. El caso de promocion se presentó con don Miguel Luis Valdes. Estaba conociendo de la cuestion cuando fué nombrado fiscal de la Cor-



te Suprema. Acabó de conocer ántes de pasar a su nuevo puesto; pero cuando fué llamado a concurrir al acuerdo, la Corte declaró por unanimidad que no debía hacerlo desde que había dejado de ser juez i era fiscal al tiempo del acuerdo. Porque sabemos que se refiere a los dos tiempos.

Todas estas dificultades las salvó el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil que dice que «ningun acuerdo podrá efectuarse sin que tomen parte todos los que... *como jueces*... hubieren concurrido a la vista». Ahora habrían tenido que fallar el Ministro suplente i el señor Valdes en esos casos.

Art. 90. Son casos especiales.

Reproducido en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil que suprimió la frase... «como si no hubiera sido visto anteriormente»... que es una redundancia, pues, «proceder a ver de nuevo»... es que la causa vaya al rol para ser sorteada de nuevo.

El lugar en que entran dependen del Presidente; jeneralmente se les da preferencia porque el rol es por antigüedad i ésta no puede perderse por muerte o imposibilidad de un juez, indudablemente.

Arts. 92 i 93. Refundidos en el art. 181, del Código de Procedimiento Civil que, además, complementa el 178 ya visto.

Sobre ésto introduce sustancial innovacion el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, pues, establece la regla de que «en caso de no poder concurrir alguno o algunos de los jueces, no se volverá a ver la causa cuando quedan eniem-



bros suficientes para fallarla». Por ejemplo, será el caso cuando concurren cuatro jueces i fallece uno: quedan tres.

Art. 94.—Los acuerdos empiezan por ser privados. Los relatores se llaman para ilustrar a los ministros. El art. 183 del Código de Procedimiento Civil amplía el inciso 2.º de éste.

Art. 95. La historia de este artículo 95 es un trasunto de otra lei, la del *20 de Enero de 1873*, que ya disponia esto del Núm. 1.º Esta lei se dictó para todos los tribunales, colegiados en jeneral, comprendiéndose, por consiguiente, el Tribunal de Cuentas, etc. El art. 189 del Código de Procedimiento Civil, dice que se espresará sólo el nombre de los miembros que hayan sostenido opinion contraria. Es claro, se entiende que los otros han contribuido a formar la resolucion.

2. Para salvar la responsabilidad de los disidentes i de los que hayan emitido un voto favorable por razones especiales que no se han consignado en las sentencias, pues, en ésta sólo van los nombres de los ministros que votaron en pro o en contra sin decir los fundamentos que tuvo cada cual. El libro especial estará en la Secretaría (art. 189 del Código de Procedimiento Civil).

3. Las sentencias tienen por objeto no sólo dirimir el pleito sino tambien ilustrar la opinion. Como se hace para formar jurisprudencia no tiene objeto que se publiquen todas sino las que el Tribunal mande publicar para sentar doctrina. Así lo establece el decreto reglamental de *20 de Noviembre de 1878*.

Los últimos incisos, que figuran en algunas ediciones, como en la mía, pues, hasta para ésto soi desgraciado, no



fueron aprobados por el Congreso. Aparecen por error de copia.

ART. 96. Esto es para garantir la opinion libre; para evitar la influencia, la sugestion que produce en el ánimo de los jóvenes lo que dicen los mas antiguos i respetables. El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil está igual.

ART. 97. El artículo 184 del Código de Procedimiento Civil ha modificado éste, ampliando el plazo a 30 dias si la peticion la hacen varios miembros; 15 si uno solo.

Estriba su razón en que cada uno necesita tener el expediente a la vista.

ART. 98. Por si se estravian las sentencias.

Inciso 2.º Esto no pasa hoi; cuando se dictó esta lei habia dos salas pero independientes, pareciendo cada una un Tribunal aparte. Ahora hai uno para cada Secretaría (dos) porque el Tribunal es uno solo.

De los Presidentes de las Cortes de Apelaciones

ART. 99. Presidente lo es el mas antiguo i se turnan por un año.

2. Turno de vacaciones; 3. El Ministro de turno de las vacaciones tambien tiene la facultad de convocar estraordinariamente a la Corte.

8. Una de las misiones mas importantes del presidente.

ART. 101. Hoi ya no pueden ofrecerse estas dudas porque se hace a la suerte.



TÍTULO V

De la Corte Suprema

ART. 102. Cuando se dictó esta lei tenia sólo 5 miembros; la lei le dió 7.—La lei promulgatoria de *13 de Octubre del 75* estableció que quedaria con 5 hasta que se dictara el Código de Tribunales, pasando, entónces, a tener 7. *La lei de 19 de Enero de 1889* se los dejó, modificando su constitucion en sus artículos 14, 15, 16, 17, 18, i 19. *La lei de 2 de Febrero de 1892*, en su art. 3.º dejó como facultativo de la Corte su division en dos salas. *La lei de 28 de Agosto de 1902*, aprobatoria del Código de Procedimiento Civil, tambien la modificó, estableciendo que se compondría de 10 miembros, divididos en dos salas, funcionando todos en un solo cuerpo en los recursos de casacion en el fondo i de revision.

Ninguna lei ha dicho sobre si debe distribuirse el funcionamiento de las 2 salas por sorteo. *La lei de 19 de Enero de 1889* dispone como debe hacerse, diciendo que corresponde a la Corte misma efectuar la division de las causas entre las dos salas. Respetaron esta disposicion las posteriores de 2 de Febrero del 92, i 28 de Agosto de 1902. El presidente, de acuerdo con el secretario, la distribuye.

El inciso último es una disposicion transitoria que no debió insertarse aquí. Lo era don Manuel Montt.

ART. 103. Modificado por *lei de 19 de Enero de 1889* sobre nombramiento de jueces, porque hai dos de la misma fecha. Tambien se establece la incompatibilidad con los jueces de letras i de las Cortes de Apelaciones, segun la lei de



31 de Diciembre de 1889 que, presentada como proyecto por el Ministerio de Hacienda para los funcionarios de este ramo, se hizo extensiva a los demas.

ART. 104. La *lei de 19 de Enero de 1889* (sobre funcionamiento de la Corte de Apelaciones i de ésta) en su art. 19, le dió tres. La de *5 de Enero del 94* (sobre sueldo de jueces) en el único artículo transitorio dijo que en caso de vacancia quedaba con dos. Le dió, pues, dos. La de *28 de Agosto de 1902*, promulgatoria del Código de Procedimiento Civil al establecer la division forzosa en dos salas, hizo que se dictara la *lei núm. 1648 de 8 de Febrero de 1904* que le d ó un tercero para evitar que dejara de funcionar una sala por enfermedad, implicancia u otro inconveniente de su relator.

ART. 105. Porteros. Perdon, señores; pero hai que darlos a conocer. I con ese disfraz...

ART. 107. 1.º Tambien conoce en única instancia de los recursos de casación, contra las causas que falle un ministro de la misma i de los recursos de revisión que pueden interponerse contra las sentencias de cualquier tribunal, salvo una sentencia dada por la Corte Suprema misma, conociendo una casación o revisión indudablemente (art. 980 del Código de Procedimiento Civil).

Este último recurso es un recurso nuevo en el cual se admite la nulidad de una sentencia por haber en ella fraude, dolo u otra circunstancia que el art. 980 contempla.

Se debe llevar este recurso a la Corte Suprema, procediendo contra cualquiera sentencia a firme aunque sea de un juez de distrito.



Este recurso debió quedar en el 1.^{er} inciso, como ahora viene en el nuevo código de tribunales.

ART. 109. Esta es una facultad acumulativa. La Corte Suprema, cuando nota que la de Apelaciones no ha corregido como debe las faltas de los tribunales o jueces que están bajo su dirección, entra ella a hacerlo.

ART. 110. Aquí falta algo: el 71; pero implícitamente está comprendida en el 109. Con todo habría sido mejor agregarlo aquí i así lo hace el nuevo código. Puede proceder de oficio en el caso anterior, pues, esto quiere decir la frase «*siempre que lo juzgue conveniente*»..... El código nuevo lo dice espresamente.

ART. 111. Ya habíamos hablado de esto al tratar del art. 5.^o de esta lei.

El art. 143 se refiere al recurso de protección o amparo de las garantías individuales, que es la mas alta facultad conservadora de los tribunales. Cualquiera puede recurrir a su nombre, sin necesidad de poder, a este recurso.

Este recurso de amparo está reglamentado por la *lei de 3 de diciembre del 91*. Tal lei lo estendió más allá de lo debido: el recurso de protección se refiere sólo a dos casos: cuando se ha dictado arresto por autoridad que no tiene facultad de arrestar o cuando en el arresto no se han guardado las formas legales. La lei de diciembre le agregó otro: cuando no hay mérito bastante para decretar la prisión, aunque sea en forma i por la autoridad competente. Esto es profundamente absurdo y erróneo. Este recurso extraordinario de Habeas Corpus tiene su historia: cuando se produjeron los acontecimientos del 91, el Congreso se apresuró a votar esta lei para resguardar la persona de los ciu-



dadanos contra los abusos del poder. Pero esto no es nada; tiene esta lei un agregado, ademas, inconsulto i profundamente desmoralizador. Dice que en caso de declararse improcedente el arresto debe el Ministerio Público acusar inmediatamente a su autor. Tal disposicion no ha traido otros beneficios que los contraproducentes de introducir hondas perturbaciones y toda clase de jérmenes nocivos en la administracion de justicia; viniendo a atar las manos de los jueces, a coartar i reducir la esfera de su accion i, aun mas, a hacer ilusorio el papel conferido por la sociedad a estos funcionarios en cuyas manos ha depositado su confianza i encargado a su celo la custodia de su tranquilidad i órden. Los delitos, en jeneral, quedaran impunes; la mayoria de los criminales escaparan fácilmente a la accion de la justicia por irresolucion i timidez de los tribunales que, faltos hoy de los medios de que antes disponian para perseguir aquellos i perseguir a éstos, sus recursos i su independencia estan a merced de la amenaza oprobiosa que pende sobre sus cabezas, del riesgo inminente de convertirse de jueces en reos.

Ya una vez se ha presentado este caso: asunto entre el juez Astorquiza i el abogado Novoa. Pero el Ministerio Público, comprendiendo su deber resolvió la cuestion sabiamente. La lei, dijo, me obliga a acusar al juez; pero, debiendo yo acusar delitos, mal puedo instaurar esta acusacion sobre lo que no estraña un delito sino una mera equivocacion. Realmente, esta resolucion del Ministerio Público ha venido a salvarnos de los funestos resultados que tal lei ha podido traer. En adelante en casos iguales el Ministerio Público di-



rá lo mismo, con lo que esta disposicion vendrá a morir lentamente.

ART. 115. Los acuerdos de la Corte Suprema se someterán a las mismas reglas de las de Apelaciones.

ART. 117. En segunda instancia debe fallarlos una de las salas de la Corte, con arreglo al art. 107, Inc. 2.º.

*Presas...*son las capturas bélicas de prendas enemigas en el mar. La Corte sólo declara si es o no buena presa. Nada mas que en esto consiste la *causa de presa*.

La segunda parte, es decir, lo que corresponderá al captor, etc., es de Hacienda i corresponde a los tribunales ordinarios.

TITULO VI

Del nombramiento, subrogacion e instalacion de los jueces

Del nombramiento de los jueces

ART. 120. La inamovilidad es una garantía para asegurar la independendencia de estos funcionarios. La constitucion dice en su art. 101 que permanecerán en sus puestos durante «su buena comportacion». La lei fija, entonces, los casos en que esta buena comportacion no existe i, considerando que un juez pierde su puesto sólo por condena a inhabilitacion absoluta o especial perpetua para este cargo (art. 169, inc. 3.º), venga esta como principal o accesoria, vemos que es demasiado benigna al determinar la indignidad de un



individuo para este desempeño. Puede presentarse el caso de un ebrio consuetudinario, de otro que de constantes escándalos como padre o esposo, etc., i no perderá su cargo.

Por esto el nuevo proyecto define la mala conducta de un juez (ser viciosa, haber recibido varias amonestaciones de los tribunales superiores, etc.).

Art. 122 i 123. Derogados por *lei de 19 de Enero de 1889*, sobre nombramiento de jueces, primero, i por la del *18 de Enero del 94*, después. Hai, aun, otra posterior que modifica la precedente en cuanto al nombramiento de jueces interinos: de *10 de Enero del 95*.

El sistema de la lei orgánica no satisfacía los fines de la propuesta de que habla la constitucion en su art. 95, toda vez que «propuesta» lleva, ademas, de la presentacion de nombres la idea de un cargo determinado a que estos se oponen. La lei del 89 tampoco hacia propuesta: la del 94 sí porque ya se acabaron estas listas anuales: la Corte Suprema forma una lista de 10 o 15 para candidatos a Cortes, juzgados de letras para el caso de vacantes. El tribunal debe reunirse con mayoría absoluta de sus miembros. Formada la lista la envia al Consejo de Estado. En esta deben figurar los requisitos de ser abogados i los cargos especiales que hayan servido. El Consejo de Estado saca de esta lista una terna para presentarla al Presidente de la República. El orden de ella es el alfabético.

Este mismo procedimiento servia para los interinatos; pero sucedía que durante esta tramitacion tan larga pasaba el tiempo del interinaje. Para evitar esto la *lei del 94* dijo que el Consejo de Estado pasaría en estos casos una terna de en-



tre los que hubieran figurado el año último para cargos análogos. Mala también, porque sucedía, a veces, que no había habido lista del año anterior. La *lei de 10 de Enero del 95* salvó este inconveniente, diciendo que la terna la formaría el Consejo de Estado de las personas que se presentaran en condiciones de aptitud solamente para estos cargos.

De la subrogacion de los jueces

Subrogacion... es el llamamiento que hace la lei a un funcionario para que desempeñe las funciones de otro.

Tiene lugar en todos los casos en que no ha habido nombramiento del Presidente de la República para interino, suplente o propietario i la lei nombra inmediatamente uno para que la administracion de justicia no se paralice ni un segundo. También, en casos especiales de implicancia i recusacion.

Arts. 125 i 126. No habló la lei de subrogacion de un juez de distrito cuando se inhabilita en absoluto, quedando paralizada la administracion de justicia. De aquí que la *lei núm. 1468, de 1º de Mayo de 1901*, dijo, modificando este art. 126: «En los demas casos en que faltare un juez de distrito o de subdelegacion se nombrará un interino o suplente; entre tanto conocerá de los juicios pendientes el juez que debe subrogarle en virtud del artículo precedente».

Art. 129. Derogado por varias leyes estando vigente la de 1.º de Mayo de 1901, que lo dejó así: «*En el caso de este artículo será suplida la falta del juez 1) por el abogado que desempeñe el cargo de Promotor Fiscal; 2) por el funcionario que desempeñe el de Defensor Público i 3) por el abogado*



que nombre anualmente la Corte de Apelaciones respectiva para este efecto. A falta de todos éstos pasará al juez de letras mas inmediato de la misma provincia. Estos entran sin remuneracion». Juez mas inmediato es el que está mas cerca, tomando en cuenta las vías de comunicacion. El cargo de Promotor Fiscal, cuando no es titular, lo desempeña el secretario municipal. Por eso la lei habla de «abogado promotor».

Estos abogados los designa la Corte por una lista que el juez de letras respectivo debe pasarle cada año en Noviembre, con sus condiciones especiales. De éstos la Corte forma terna i subrogan en el orden de ella.

ART. 131. Requisitos exigidos por el artículo 58 i tambien por el 103 desde que la Corte Suprema tambien puede integrarse.

El inciso 2.º de este artículo puede considerarse derogado por el art. 173 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 132. Porque no quedaría quien hiciese el llamamiento.

ARTS. 133 i 134. Dióse reglas distintas para las Cortes de Concepcion i Serena i la de Santiago porque ésta formaba con sus dos salas en que se dividía dos tribunales autónomos.

A los ministros.—Porque el Presidente no sale de su sala; sólo integra en la suya.

Aquí vienen las reglas de los artículos 130 i 131. El inciso 2.º del 131 está modificado por el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, dice: que «toda vez que haya que integrar un tribunal con miembros que no sean suyos



se hará saberlo a las partes ántes de comenzar la vista etc.».

5.º Distinto del artículo 133 porque entónces las Cortes de Concepcion i Serena no tenían juzgados sino de una jurisdiccion.

Para integrar las Cortes creadas despues no hai mas que aplicar por analogía estos preceptos. Estos defectos han sido salvados en el nuevo Código.

Para integrar... cuando falta alguno o se necesitan mas de los que hai, como cuando se produce dispersion de votos.

ART. 136. La *lei de 2 de Febrero de 1892*, dice en su artículo 4.º inciso 2.º: «Siempre que se hubiere de integrar la Corte Suprema con los ministros o fiscales de la Corte de Apelaciones de Santiago, con los jueces letrados o con los abogados, se hará el llamamiento por medio de un decreto en que se espresce nominalmente la persona llamada».

3.—De la instalacion de los jueces

ART. 140. Con prestar el juramento quedan instalados.

ART. 142. Pueden prestar el juramento ante el intendente o el gobernador en casos apurados.

ART. 144. No prestan juramento cuando son llamados a subrogar accidentalmente.



TITULO VII

De los deberes i prohibiciones a que están sujetos los jueces

ART. 147. Obligacion de residencia...

ART. 148. Obligacion de asistencia... Deben permanecer a disposicion del público aunque no haya despacho.

ART. 149. Ademas es feriado el 25 de Junio en que se elije Presidente por lei núm. 1752, de 31 de Agosto de 1905.

ART. 150. Segun este artículo los jueces podían ser árbitros, intervenir en particiones, etc. Entónces, los abogados del Congreso, viendo la competencia que los jueces les hacían con esto, promovieron la *lei de 31 de Enero del 83* que estableció que sólo podían servir tales cargos en las causas en que estos parientes estuviesen «originariamente interesados»... para evitar que por medio de subterfujios se les habilitase para servirlos.

«Originariamente interesados»... quiere decir que tengan derecho ántes de producirse el litijio, (herederos i no legatarios, etc.)

Los jueces pueden ser árbitros en los juicios de sus parientes dentro sólo de cierto grado señalado por la lei.

ART. 151. No sería justo prohibirles esto a los jueces de distrito i de subdelegacion que son cargos consejiles, sin remuneracion.

ART. 152. «Orden de antigüedad»... es decir, el orden en que se han puesto en estado de sentencia.



«Salvo cuando motivos graves i urgentes»... Queda esto a la conciencia del juez.

El artículo 169 del Código de Procedimiento Civil dijo mas sobre el plazo, pues, en el inciso 3.º fijó el término de 60 dias para dictar la sentencia definitiva en el juicio ordinario.

ART. 153. La violacion de este precepto es causal de recusacion (art. 250).

Esta disposicion tiene por objeto evitar que el juez pierda la imparcialidad que le es necesaria para fallar conforme al mérito de los autos, pues, habiendo avanzado opiniones un juez, se verá por decoro o amor propio obligado a sostenerlas.

No necesita que esté conociendo: hai causal aun tratándose de asuntos que ha de conocer, como un ministro de Corte que no podrá dar opiniones respecto de asuntos que conocen los jueces letrados porque ellos han de conocer en 2.ª instancia.

El Código de Procedimiento Civil consigna otra causal de recusacion en el art. 130.

Inciso 2.º «Fuera del Tribunal»... No se refiere al recinto material, al lugar. Así, quiere esto decir que no puede la parte ni aun dentro del tribunal hablarle despues de pasado el tiempo en que debió hacerlo, como despues de un alegato, de un comparendo, etc., acercársele para decirle algo.

ART. 154. Ya hemos visto esta disposicion al tratar de la compra-venta en el Código Civil (art. 1798). Este artículo es, sin embargo, mas ámplio que el civil, pues, se refiere aun a bienes que no se venden a consecuencia del litijio;



basta que se trate de bienes que se litiguen en asuntos de que él conoce.

Pero es mas restrictiva en otro sentido: el Código Civil no fija término para esta prohibicion; ésta fija 5 años.

No lo inhabilita para adquirir como heredero ab intestato porque la lei comprende que puede haber una razon mas fuerte, la del vínculo de sangre, por ejemplo, que los simples sentimientos de gratitud por haber fallado en favor del testador.

Inciso 3.º Lo de nulidad está de mas, sabemos que es efecto de leyes prohibitivas. Tal vez se puso para añadir a ella la sancion penal.

Concuerta tambien este artículo con el 22 del Código de Minería.

TITULO VIII

De los honores i prerrogativas de los jueces

ART. 156. El último reglamento es de *1.º de Junio de 1897*. Los dicta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

TITULO IX

De la responsabilidad de los jueces

ART. 159. El art. 102 de la Constitucion dispone en sustancia lo mismo.



PONTIFICIA
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Los casos a que se refiere este artículo son los contemplados en los artículos 223 i siguientes del Código Penal. Todos se refieren a cohecho, torcida administracion, negacion de justicia, etc. La diferencia está en que en unos hai dolo i en otros no.

Inciso 2.º Esto porque las sentencias de la Corte Suprema son las últimas: no hai un tribunal superior que las revea, por lo tanto, no hai quien pueda entrar a estudiar su fondo para buscar los delitos.

En todos los demas casos de delitos de jueces se les aplica el marco de la lei.

Art. 160. Es regla jeneral de que todo individuo que comete un daño está obligado a repararlo. Artículos 2,314 i 2,329 del Código Civil i 2.º del Código Penal.

Art. 162. Así lo establece tambien el artículo 2,317 del Código Civil.

Art. 163. Este es un fuero de inmunidad para estos funcionarios i semejaute al de los intendentes i gobernadores. Si se trata de un juez de letras el tribunal llamado a declarar si es admisible o no la acusacion es la Corte de Apelaciones. Si es un juez de distrito o subdelegacion se ocurrirá al de letras. Deben estos tribunales oir previamente a los acusados.

Este fuero creado por la lei desaparece como todos ellos, no creados por la Constitucion, en los delitos electorales (art. 130 de la Lei de Elecciones).

Este es fuero de inmunidad. Tienen, ademas, fuero de privilejio para ser juzgados por tribunales especiales.

Pero si los jueces en su carácter de particulares cometen un delito serán acusados como a cualquier individuo. Por-



que parece de esta disposicion que en todo caso tratándose de un juez deben llenarse estos trámites; lo que acarrearía profunda desmoralizacion. Los artículos 67 i 117 tratan de estos fueros de privilejio. Tambien desaparece en el caso del artículo 130 de la Lei de Elecciones.

La disposicion de la *lei del 3 de Diciembre de 1891* que reglamenta el recurso de amparo i que ordena en caso de darse lugar al recurso, poner a disposicion del ministerio público los antecedentes para que se acuse al juez, no ha derogado este artículo, pues que no habiendo derogacion expresa tampoco puede haberla tácita por no existir contradiccion entre ellas.

ART. 164. Esta si que está espresamente derogada por la *lei del 91*.

ART. 165. El agravio consiste en que el juez, violando las leyes de procedimiento, ha actuado de suerte que ocasiona la pérdida del pleito.

Se necesita un acto preparatorio de la accion en el caso del artículo 161, es decir, agotar primero los recursos que la lei pone en manos de las tres partes como son, apelar, entablar recursos de quejas, etc. Si no ha recurrido a estos previamente no vale la acusacion al juez porque aquella omision significa haberse conformado con la resolucion judicial.

ART. 166. Esto no es enteramente exacto porque existe hoy un recurso nuevo, el de *revision*... que viene a contrariar esta disposicion. Tal recurso, adoptado por todas las legislaciones modernas, i que corresponde al mas alto tribunal, consiste en remover i rescindir las sentencias a firme, la cosa juzgada, cuando hechos posteriores prueban que se ha dic-



tado en virtud de fraude o dolo. Este recurso, aplicado al principio solamente al procedimiento penal, se ha hecho hoy extensivo al civil (artículos 980 i siguientes del Código de Procedimiento Civil). El principio que establece la inviolabilidad de la cosa juzgada, tanto tiempo existente, viene hoy por tierra con este recurso. Perfectamente, ya que la cosa juzgada es tan sólo una presunción de verdad que debe desaparecer completamente desde el momento en que la realidad la desvanece.

Antiguamente tenía este recurso, por el artículo 160 i los siguientes, el objeto de perseguir la responsabilidad de los jueces según las reglas jenerales del Código Civil i del Código Penal.

En los casos en que no pudiera intentarse el recurso de revision, por haber pasado el plazo, podría intentarse las acciones de los artículos 1458 i 2316 del Código Civil.

En materia civil el Código de Procedimiento Civil enumera taxativamente los casos que merecen este recurso de revision (art. 980). En materia criminal son mas o menos los mismos.

ART. 167. No son responsables por cuasi delitos civiles porque no son mui ilustrados; como no son abogados no tienen obligacion de conocer la lei, por tanto, están expuestos a muchos errores.

ART. 168. Deroga las del Código Penal porque esta lei es posterior a él i es especial porque trata de jueces.



TITULO X

De la espiración i suspencion de las funciones de los jueces

ART. 169. Se refiere a las de los artículos 16, 36 i 41. Respecto de los jueces de subdelegacion i distrito hará esta declaracion el gobernador con informacion del juez de letras.

2.º *Órdenes eclesiásticas mayores* son las del subdiaconado para arriba.

3.º Esta escepcion es altamente inmoral i odiosa. Fijémonos en sus consecuencias: si un individuo cualquiera comete el mas leve e insignificante delito, queda inhabilitado para ser juez, i en cambio, un juez puede cometer cualquier delito que no merezca inhabilitacion absoluta o especial para el cargo i sigue siendo juez, ya que sólo los crímenes traen esta pena, i sólo estas penas hacen que terminen sus funciones. Esto es un absurdo que se corrige en el nuevo Código. La escepcion del artículo 171 si que es fundada i conforme al artículo 101 de la Constitucion.

4.º No se comprenden los de subdelegacion i distrito porque estas son cargas consejiles, irrenunciabiles.

5.º Igual al anterior. No están comprendidos porque no tienen sueldo.

6.º Esto tiene vacíos: cuando se trata de suplencias o interinajes no debe espirar sino suspenderse, como se ha entendido en la práctica. No habló de traslacion que ocurre cuando ocupa otro puesto no superior sino inferior.

Había otro número que hablaba de pérdidas de requisitos



como causal de espiracion. Pero don Bernardo Lira dijo que no tenía razon de ser, ya que éstos, (ser abogado, tener tal edad, etc.) no se pueden perder. Olvidó que la ciudadanía, que es un riquisito, se puede perder.

La *lei de 31 de Agosto del 80* agregó tres números mas 7.º, 8.º i 9.º.

Dicen así: El cargo de juez espira:

7.º *Por la aceptacion de todo cargo o empleo administrativo conferido por el Presidente de la República con escepcion de los creados por lei de instruccion secundaria i superior, del cargo de Consejero de Estado i de los empleos diplomáticos.*

Hai que observar que la *lei de 5 de Enero del 94* amplió ésto a todo cargo público: (art. 6.º) «Los empleos de jueces son incompatibles con todo otro empleo o cargo público».

Es tan absoluta esta lei que otra posterior fijó escepciones para el caso de Consejero de Estado a título de majistrado i para tomar parte en comisiones no retribuídas para formar i reformar leyes.

Esto es para los rentados; los no rentados se rijen por los 3 números de la lei del 80.

8.º *Por aceptar o continuar desempeñando el cargo de Senador o Diputado al Congreso Nacional o el de municipal, ya sea en calidad de propietario o de suplente.*

Hai que fijarse que, segun la reforma constitucional del 92, no pueden ser elegidos diputados ni senadores los jueces. Por la inversa, ningun diputado ni senador puede ser



nombrado juez ni nada (artículos 21 i 26 de la Constitución).

Este número 8 ha pasado, pues, a ser letra muerta, respecto de los jueces rentados, i sólo puede servir para los de subdelegacion i distrito.

9.º Por la aceptacion del cargo de Presidente de la República.

ART. 171. Núm. 2.º Siendo ésta una incapacidad para ser juez, no lo hace cesar, porque para ello se necesita causa legalmente sentenciada.

Esto es bien curioso. Según este número se suspende al juez en dos casos: cuando en sus funciones de tal comete un simple delito o crimen, y en el momento de procesársele por él i cuando, como particular, comete un delito que merezca pena afflictiva. De suerte que si en este último caso comete un delito que no merezca tal pena afflictiva no es suspendido. Ahora, como segun la lei de garantías individuales, un individuo es preso cuando se le presume autor de un delito cualquiera, por leve que sea, resulta este curioso caso de un juez que sigue administrando justicia desde el fondo de una celda carcelaria. Sin embargo, esta escepcion se funda en el artículo 101 de la Constitucion porque puede ser absuelto.

Auto ejecutorio... es aquel que puede cumplirse desde luego i respecto del cual no hai apelacion.

Inciso 2.º Este se pone en los dos casos en que se llama procesado el juez i en que es ejecutorio el acto: cometido el delito en ejercicio de sus funciones, «desde que es admisible la acusacion», cometido como particular «desde que se dicta orden de prision en su contra».



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

4.º La lei de licencias a que se refiere este número, es la de *24 de Junio de 1898*, núm. 1041. En un decreto reglamentario, de *23 de Mayo de 1889* se dispuso que en la solicitud debía fijarse el día en que iba a principiar a correr la licencia. Igual cosa se ha dispuesto para todos los empleados públicos por decreto de *2 de Enero de 1904*.

No está contemplado el caso de una traslacion o promocion, aun en el carácter de interino a otro puesto.

TITULO XI

De los jueces árbitros

ART. 172. De aquí se deriva que los jueces árbitros no son autoridades públicas sino que deducen su poder de las partes o, en desacuerdo de estas, del juez. Por tanto no tienen mas facultades que las que les confieren las partes en su nombramiento, por lo que estos juicios se llaman «de compromiso» i los jueces «compromisarios». Por las mismas razones, el juez árbitro no tiene imperio, i en caso de ser résistido por las partes el cumplimiento de sus fallos, debe recurrirse a la justicia ordinaria para que los haga ejecutar, llevando la sentencia arbitral como un título ejecutivo (791 del Código de Procedimiento Civil.)

La institucion de los árbitros es tan antigua casi como la humanidad, ya que las primeras disputas de los hombres no han de haber sido falladas por una autoridad que no existía. En el Derecho Romano antiguo las sentencias arbitrales no tenían mas fuerza que la que les daban las partes



que contraían un compromiso de honor para ellas. En el derecho romano nuevo, tampoco tenían la estension del moderno derecho porque las partes podían desligarse de su cumplimiento por el pago de la multa que estipulasen. Así siguió hasta la Novísima Recopilacion que les dió fuerza legal.

Cuestion que se producía antiguamente era ésta ¿en qué situacion quedaban los partidores que el testador, segun el artículo 1324 del Código Civil puede nombrar, en vista de este artículo 172? De lo dispuesto en el artículo 176 se vé que deben resolverse las cuestiones hereditarias por árbitros, pero, segun el artículo 172, no hai mas árbitros que los nombrados por las partes o el juez. Esto es sin duda, un olvido que se ha subsanado en el artículo 802 del Código de Procedimiento Civil, el cual ha consagrado esta tercera clase de sus árbitros nombrados por el testador.

ART. 173. La costumbre había establecido una clase media de árbitros: los que no se sujetaban a las reglas de derecho en la tramitacion, pero sí en el fallo. Estos, que no existían sino en la práctica, tienen ahora existencia legal por el artículo 784 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 174. Por su parte, sólo pueden nombrar árbitros los mayores de edad que tienen la libre administracion de sus bienes. Así se desprende del artículo 804 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el menor habilitado de edad no puede ser árbitro porque no tiene la *libre disposicion* de sus bienes, aunque si la *libre administracion* de ellos. Con lo que se ve que para nombrar se necesita ser libre administrador i para ser nombrado libre disponedor. El Código nuevo de Tribunales en su artículo 197 cambió las palabras «libre disposicion» por «libre administracion».



Con esto de que el árbitro sea libre disponedor o administrador, se persigue la garantía de sus actos respecto de las partes.

Escepcion a este artículo 174 es el 5o de la lei de Instruccion Secundaria de 9 de Enero del 79, que dice: que todo nombramiento de árbitro en que tenga que intervenir el Gobierno o los Tribunales, ha de recaer en un abogado, porque ha de tener conocimientos profesionales en el asunto de que va a tratar.

Art. 175. Causales de inhabilidad para ser árbitros: ser partes, (consignatarios), jueces que conocen del asunto. De suerte que el art. 1325 del Código Civil queda vijente ménos en esta parte.

Art. 176. La regla jeneral es que las partes puedan sustraer los juicios del conocimiento de la justicia i someterlos a compromisos.

Pero hai negocios que deben necesariamente someterse a la justicia ordinaria i que no pueden entregarse a árbitros (178 adelante) i otros que deben someterse a éstos.

Este artículo 176 trata de los asuntos que deben resolverse en compromisos por ser cuestiones mui complicadas que requieren una atencion tranquila, la que encontraremos en un árbitro, i no en un juez en medio de su compleja actividad.

1.º Ya lo había dicho el Código Civil en sus artículos 1776 i 2115. Hai que distinguir las de las sociedades comanditas i colectivas comerciales. En estas se hace la liquidacion por liquidadores i sólo se entrega a la decision de árbitros las dificultades que se susciten con motivo de ella entre el liquidador i los socios (414 Código de Comercio).



2.º Título X del Libro III del Código Civil.

3.º Artículos 414, 425, 474 i 491 del Código de Comercio.

ART. 178. En jeneral, no se someten a árbitros aquellas cuestiones en que hai interés social de por medio o que afecten a terceros indeterminados.

ART. 179. El ministerio público es el encargado de velar por el interes jeneral de la sociedad o nacion. Deberá ser oído en todos los casos de los artículos 263. Entonces, por la misma razon anterior del interés social, no pueden someterse a árbitros las cuestiones en que ellos deben ser oídos.

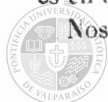
Hai, sin embargo, un vacío en este artículo, pues, segun él i el número 2.º del 263 parece que podría someterse a árbitros el conocimiento de algunas causas criminales en que no se oye al ministerio público, por no poderse pesquisar de oficio, lo que es un absurdo ya que el árbitro no podía imponer pena alguna.

Inciso 2.º Prevalece, pues, el artículo 176 cuando hai oposicion. Así en una litis entre la Municipalidad i yo no pueden nombrarse árbitros porque aquella es una institucion de derecho público i, por tanto, ha de oirse el ministerio público. Pero se trata de la Municipalidad i la Traccion; entonces sí, porque forman una sociedad civil i aqui entra el artículo 176.

ART. 180. Deben proceder de acuerdo porque el nombramiento de árbitro es esencialmente de confianza.

ART. 181. Acuerdo respecto de la persona del árbitro que es en quien se deposita la confianza.

Nos e considera propuesta hecha por las partes la que se ha-



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

ga entre los interesados para ponerse de acuerdo, propuesta privada; ha de hacerse en el acto oficial, ante la justicia. Cada parte propondrá uno, con lo que se evita que por mala fé se inhabilite a personas que merezcan confianza i se ponga trabas a la intervencion judicial como podría suceder en casos de presentarse listas.

Tratándose de partidores hai la regla del artículo 802 del Código de Procedimiento Civil en relacion con el 416 del mismo. De este se desprende que pueden proponer las partes en tal caso hasta 2.

ART. 183. Si falta cualquiera de estos requisitos, que son esenciales, el nombramiento es nulo.

ART. 184. Si falta la designacion del lugar o del tiempo el nombramiento no es nulo; la lei suple esta falta.

Inciso 3°. ¿Se cuentan los dias feriados? El artículo 69 del Código de Procedimiento Civil no lo dice, pero, segun el artículo 50 del Código Civil se cuentan los dias corridos. Sin embargo, mientras ha estado suspendida la jurisdiccion del árbitro no se consideraran corridos. El árbitro, no obstante, puede habilitar el dia o los dias feriados.

ART. 185. El juramento se pide al árbitro solo como una garantia para las partes; luego si no jura no hai nulidad por no ser un requisito esencial. Se presta ante el juez o el secretario.

ART. 186. Los artículos 786 i 787 del Código de Procedimiento Civil determinan la manera como se resuelve esto, Dicen así:

Art. 786. Si los árbitros fueren dos o mas todos ellos deberán concurrir al pronunciamiento de la sen-



tencia i a cualquier acto de sustanciacion del juicio; a menos que las partes acordaren otra cosa.

No poniéndose de acuerdo los árbitros, se reunirá con ellos el tercero, si lo hubiere, i la mayoría pronunciará "resolucion".

Art. 787. En caso de no resultar mayoría en el pronunciamiento de la sentencia definitiva o de otra clase de resoluciones, siempre que ellas no fueren apelables, quedará sin efecto el compromiso, si este fuere voluntario. Si fuere forzoso se procederá a nombrar nuevos árbitros.

Cuando pueda deducirse el recurso, cada opinion se estimará como resolucion distinta, i se elevarán los antecedentes al tribunal de alzada para que resuelva como fuere de derecho sobre el punto que hubiere motivado el desacuerdo de los árbitros".

Lo que hace el artículo 786 no es otra cosa que repetir la misma regla dada por esta lei i que hemos visto en los acuerdos de los tribunales colegiados (176 adelante) desde que no hizo diferencia alguna, al tratar de aquellos, entre tribunales ordinarios i arbitrales. La repitió por hacer la escepcion que se establece en el inciso primero al decir que deberán concurrir todos «para cualquier acto de sustanciacion del juicio»... lo que no habia dicho la lei orgánica.

Art. 187. Si se trata por ejemplo de una cuestion cuya materia importa \$ 20 tocara al juez de distrito su conocimiento en juicio ordinario; pero como este juez conoce en única instancia hasta esa suma no hai apelacion por la sentencia del árbitro. Si se trata de \$ 30 si que habrá apelacion ante el juez de subdelegacion del lugar donde se cele-



bró el compromiso. Si se trata de miles a la Corte de Apelaciones ya que habria conocido en primera instancia el juez de letras. Las sentencias malas de los árbitros pueden ser revistas por el tribunal superior a pesar de ser tribunal de derecho, (art. 798 del Código de Procedimiento Civil).

Solo es procedente el recurso de casacion en el fondo contra sentencias de árbitros cuando estos son de derecho i de segunda instancia (art. 940 del Código de Procedimiento Civil).

Renuncio yo el recurso de apelacion i el árbitro falla *ultra petita*. En casos semejantes no porque se haya renunciado el recurso voi a quedar a brazos cruzados porque la renuncia se refiere al fallo dado sobre el punto materia de la discusion. En estos casos, también, la parte perjudicada no está obligada a acatar la resolucion del juez.

Lo mismo en caso de incompetencia o inhabilidad del árbitro como es este caso: la lei da dos años de plazo al árbitro para que falle i solo viene a hacerlo a los cinco. Yo puedo apelar a la justicia aun renunciado el recurso.

ART. 188. Se opera un verdadero contrato entre las partes i el árbitro muy semejante al mandato.

Todos estos casos son de revocacion tácita.

ART. 189. Revocacion espresa.

ART. 190. El mandato si que cesa por muerte del mandante.

ART. 191. Despues del Código de Procedimiento Civil es dudoso que este artículo subsista en toda su plenitud. Segun el artículo 130 de él, hai causales de recusacion irrenunciabiles i éstas se aplican tambien a los jueces árbitros. Pero esto es solo transitorio hasta que no se dicte el Código



PONTIFICIA
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Orgánico de Tribunales que las trata como causales de implicancia.

En jeneral, la recusacion no reza respecto de los árbitros. Pero sí en estos casos. Aquí vale como prueba plena el juramento.

Con todo este artículo 191 seguirá rijiendo porque trata de recusacion i las del 130 son de implicancia. Luego, las de recusacion son irrenunciabiles.

TITULO XII

De la competencia

Reglas jenerales

ART. 192. No hai que confundir la competencia con la jurisdiccion. «Jurisdiccion»... es la facultad de administrar justicia. «Competencia»... es la facultad de un tribunal de conocer en los negocios que la lei coloca en la esferas de sus atribuciones. «Competencia»... es la aplicacion de la jurisdiccion a casos determinados.

La «jurisdiccion» es la línea divisoria entre un poder i otro; la «competencia» lo es entre un tribunal i otro.

ART. 193. *Radicado*... es decir, cuando ya está trabada la contienda.

Para las partes queda radicado cuando están de acuerdo en someterse a un juez. Pero puede suceder que las partes hagan competente a un juez porque se someten a él i luego aparezca otro con títulos de competencia.



Entónces, (este caso no ha sido contemplado por la lei), el tribunal superior fija la competencia i queda así radicado el juicio «con arreglo a la lei»...

«Causa sobreviniente»... Por ejemplo, es conocedor de un pleito un juez de letras i durante él se nombra gobernador a una de las partes: seguirá conociendo el mismo juez siempre. Otro: Se trata de un asunto de \$ 200 de que está en autos el respectivo juez de subdelegacion; durante él asciende el negocio a mas de \$ 200. Seguirá este juez siempre.

Excepciones a esta regla son los casos de acumulacion de autos civiles o criminales, (677 Código de Procedimiento Civil, etc.)

ART. 194. La lei ha fijado la regla para guiarse en las apelaciones; la lei fija el tribunal que ha de conocer en 2.^a instancia respecto del que conoce en 1.^a (art. 67).

ART. 195. «Incidencias»... son todas las cuestiones accesorias subordinadas al juicio; incidencia—caer dentro (incidentes). El derecho procesal fija las cuestiones que pueden ser incidentes.

Falta un complemento a esta regla que casi no es necesario mencionar: es que al juez de la causa corresponde hacer ejecutar la sentencia en caso de resistencia.

Inciso 2.^o «Reconvención»... es una demanda accesoria deducida durante el juicio contra el demandante por el demandado para que se solucione dentro del mismo juicio.

La lei ha querido esto para no multiplicar los pleitos i hacerlos lo mas cómodos posible para las partes.

Esta disposicion se completa con la del artículo 203 que:



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

viene a contradecir este inciso. Este artículo dice que deben sumarse la reconvenccion i la accion principal, de donde resulta que se litigó por \$ 200 i se me reconviene por \$ 100, como la suma forma un total de \$ 300 el juez de subdelegacion ante quien había llevado la demanda deja de ser competente i pasa al juez de letras. Esto no es una escepcion al artículo 193, porque todavía no está trabada la contienda, desde que el demandado alega la reconvenccion al contestar la demanda. Esta disposicion del artículo 203, falta de todo fundamento, daba lugar a una infinidad de fraudes cometidos por los tinterillos i litigantes de mala fé que valiéndose de ella sacaban artificialmente las causas de su juez natural para llevarlas a otro que mas les convenía, alegando reconvencciones que vinieran a sumar una cantidad superior a la que podía conocer el juez primero. El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en vista estos «trapalones», ha establecido su regla que viene a concordar con la del 195 i a derogar la del 203.

Lo mismo pasa con la compensacion.

Nada dice este artículo 195 de lo que pasaría si la reconvenccion correspondiera a un juez superior, pero implícitamente dice que en este caso se llevará como pleito aparte al juez competente. Así lo confirma el citado artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 196. Por ejemplo pasa esto en las causas criminales por faltas (arts. 33 i 37) de las cuales son competentes los jueces de subdelegacion i de distrito.



Reglas que determinan la cuantía de las materias Judiciales

Tiene importancia determinar la cuantía porque es lo que ha tenido primordialmente en cuenta el legislador para fijar la competencia.

Cuatro son los puntos de vista contemplados para fijar la competencia: 1) la cuantía, 2) los fueros personales, es decir la calidad de la persona, 3) la naturaleza del asunto (causas de comercio, de minas, etc.) i 4) el territorio.

ART. 198. Primera regla.—Se trata aquí de documentos que sirvan, en que esté el valor efectivo del tiempo. No serían buenos, por consiguiente, documentos del tiempo de la colonia para hacerlos aparecer en un pleito de hoy.

ARTS. 199 i 200. Esta diferencia no tiene razon de ser, toda vez que pueden litigar las mismas personas sobre las mismas cosas. En el proyecto de Código Orgánico, se hace distincion entre la cosa o cuerpo cierto, en cuyo caso el valor se estimará de comun acuerdo, i la cosa indeterminada para cuyo valor se estará a la apreciacion que haga el demandante.

Por ejemplo, este caso de accion personal: una casa de \$ 200.000, vendida sin fijar precio, la avalúa el demandante en \$ 200 i lleva la demanda al juez de subdelegacion; está perfectamente bien hecho, porque se está a su apreciacion.

Inciso 2.º—Acuerdo tácito que se produce por cualquier acto de las partes que signifique sometimiento al juez de que se trata. No necesita el demandado contestar



La demanda: basta que haya comparecido para cualquier trámite o diligencia.

ART. 201. Esta tasacion del perito es incontrovertible sólo en cuanto a la competencia i no en cuanto a las prestaciones mutuas que deban hacerse las partes.

ART. 202. Artículos 18 i 19 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 203. Ya lo hemos visto.

ART. 204. Criterio completamente contrario al empleado en la compensacion.

ART. 205. Hai que fijarse que se trata de ventilar un derecho a pensiones futuras; no cobrar ese derecho.

1.º caso.—No hai tiempo determinado: se trata de un censo en que deben pagarse anualmente. \$ 1.000. Esta cantidad fijará la cuantía.

2.º caso.—Hai tiempo determinado: un arrendamiento por tres años, a \$ 100 anuales. \$ 300 será la cuantía.

ART. 208 Relacionado con el 202.

ART. 209. Las disposiciones testamentarias que aquí se mencionan son las a título universal.

ART. 210. Esta enumeracion es taxativa.

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 701 considera tambien de mayor cuantía los interdictos posesorios cualquiera que sea el valor del inmueble. «Interdicto»... es el juicio sumario en que se ventila la accion posesoria.

Tambien en sus artículos 823 i 824, que tratan de aguas (distribucion de ellas), dice que es juez competente el juez letrado.

ART. 211. Artículos 13 i 21 del Código de Procedimiento Penal.



Reglas que determinan la competencia en materias civiles entre tribunales de igual jerarquía

ART. 212. La regla jeneral establecida por este artículo desaparece ante las numerosas escepciones, que en seguida se consignan, quedando vigente sólo para los casos en que la accion entablada no es mueble ni inmueble, es decir, acciones contra el estado civil de las personas, contra los derechos de familia, etc.

Regla de este artículo: «para las causas, el domicilio del demandado i en los actos no contenciosos, es decir, donde no hai demandado, el domicilio del interesado, del que los promueve».

«Domicilio...es la residencia con ánimo de permanencia, artículos 59, 67 i 68 del Código Civil.

ART. 213. Primera escepcion.

Distingue, en primer lugar, entre accion mueble e inmueble, segun los artículos 580 i 581 del Código Civil, quedando sólo mui pocas que no lo son de la una ni de la otra clase, como vimos en el artículo anterior.

Por ejemplo. Se trata de demandar a un individuo por un fundo que está en Curicó i que celebró el contrato correspondiente en Santiago. En este caso, sólo habría dos lugares en que podría ser demandado: el lugar donde se contrajo la obligacion (Santiago) i el lugar donde debe cumplirse la obligacion que se confunde con el lugar donde está situado el inmueble.

ART. 214. Pero en el caso en que se demande la entrega del inmueble, no podría aplicarse esta regla porque habla de



«accion real», confundiendo esta accion con la accion inmueble, error traducido del C. F. (526 C. C. F.)

Esto de accion real está malo, porque se trata de acciones muebles e inmuebles, sin tomar en cuenta si son personales o reales. La competencia depende de si la accion personal o real se refiere a muebles o inmuebles.

Por lo demas, esto no es sino un pleonismo, i así lo han entendido siempre nuestros tribunales.

ART. 215. Esto es inconsecuente con lo que se había dicho anteriormente, pues, contradice el artículo 213 que da derecho a elegir entre dos jueces, lo que no puede hacerse en el caso de este artículo 215, por el sólo hecho de haberse introducido muebles. Para evitar esta falta de lógica se ha entendido siempre esta disposicion como una aplicacion del número 1.º del artículo 213. Siempre será competente el juez de donde se contrató.

ART. 216. Porque es mui difícil saber donde se efectúa el contrato, en caso de muebles no hai eleccion.

El domicilio no se tomó en cuenta, tratándose de inmuebles. En los muebles, sí, en el caso de que se trate de una cosa que no es cuerpo cierto. Si se muda el deudor se le demandará en el lugar del domicilio anterior. La razon es clara: si fuese competente el juez del último domicilio le sería mui fácil al deudor desligarse de su compromiso, defraudar el derecho de su acreedor con sólo irse mui lejos donde imposibilitara la accion de éste.

En resumen, tratándose de muebles, el único juez competente es «el del lugar donde debe cumplirse la obligacion».

La obligacion debe cumplirse segun los artículos 1587, 1588 i 1589 del Código Civil.



El domicilio del acreedor se toma en cuenta cuando se ha convenido en el contrato.

Con ésto, desde que sólo ahora hemos tomado en cuenta el domicilio del deudor, queda el artículo 212 reducido casi a la nada: sólo los casos en que se trate de acciones que no son susceptibles de esta division en muebles e inmuebles, i este caso de muebles que no son un cuerpo cierto.

En cuanto al domicilio, tratándose de acciones muebles, hai que hacer esta diferencia: si la especie reclamada en virtud de contrato, se va al domicilio del demandado donde se contrató. Si se reclama en virtud de un acto no contractual se va al domicilio actual de éste. ♦

ART. 217. Mal redactado. Debe entenderse que es juez competente, el del lugar donde debe cumplirse cualquiera de las obligaciones.

ART. 218.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 67 del Código Civil.

ART. 219.—Es claro que este artículo i los demas casos, están subordinados o se refieren a aquellos juicios en que el domicilio fija la competencia, que no son otros que los del art. 212 i el último caso del art. 216.

No se aplica esta regla en el caso de que se trate de una obligacion contraida por el testador i que por su muerte resultan varios deudores (herederos). En este caso la obligacion es la misma; no se altera i se va, para fijar la competencia, a la regla que dice que es competente «el del lugar donde debe cumplirse la obligacion». No hai en este caso varios demandados, es uno sólo: la entidad moral continuadora del difunto. Pero si la obligacion que se deman-



da a los herederos no procede de contrato, entónces si que se aplica este art. Por ejemplo, me presento a los herederos de X i les digo que X me debia tanto por perjuicios, etc.

Aquí si que puedo recurrir al domicilio de cualquiera de ellos.

ART. 220.—Esta redaccion es buena; la del 219 es mala. Esta es buena en cuanto habla de «reputar domicilio» para el efecto de fijar la competencia, refiriéndose indudablemente al caso en que esta se fije por aquel.

I este lugar de asiento lo fijan los estatutos, el contrato social o la lei en el caso de que se trate de corporaciones de derecho público.

Inciso 2.º—Este inciso vino a echar a perder la cosa, al decir «deberá ser demandada»... Hai aquí un absurdo manifesto, una contradiccion con lo anterior: por el solo hecho de tener varias residencias estas corporaciones se sustraen á las reglas jenerales ya dadas. Así si un Banco de Santiago celebra un contrato que deba cumplirse en Antofagasta, debe exijirse este cumplimiento en Santiago desde el momento en que instala una sucursal en Valparaiso. No es esto divertido? O no, dice Ud?...

Una vez mas la vieja i achacosa regla: *«Los únicos casos en que el domicilio produce el efecto de fijar la competencia son aquellos en que se trata de acciones no comprendidas en la clasificacion de muebles e inmuebles i cuando se trata de muebles que no son un cuerpo cierto».*

Para cumplir este art. la lei de Administracion de los Ferrocarriles, de 4 de Enero del 84, al referirse a la Empresa de éstos, dice que su residencia está en Santiago i que será representada por el Director Jeneral.



Hai, sin embargo, distintos casos en que hai leyes especiales de competencia para esta: 1) Cuando se trata de pérdidas o deterioros de efectos o mercaderías, son competentes para conocer de ellos el juez del lugar donde se embarcaron i el del lugar donde se recibieron; i 2) en casos de accidentes de los ferrocarriles, es competente, ademas de estos, el del lugar del accidente.

ART. 221.—La sucesion del difunto se abre en el lugar del último domicilio (art. 955 del Código Civil). Si muere un chileno, con propiedades en Chile, en Paris, se abre la sucesion en esta ciudad porque esto es universal, es de derecho internacional privado.

Si se trata de un chileno o extranjero que tenga todos sus bienes en Chile i que muere allá despues de haber vivido toda su vida aquí: es juez competente siempre el de Paris. No hai mas accion que la que tienen sus herederos chilenos para que se les integre aquí la parte que les hubiere correspondido segun las leyes chilenas, (art. 998 del Código Civil). Esta accion se entablará aquí en el lugar donde esten situados los inmuebles. (Fábres—» Opúsculo sobre la Lejislacion Chilena en relacion con el Derecho Internacional Privado»).

ART. 222.—Segun el Código Civil, legalmente, el domicilio del pupilo es el del curador o tutor. Pero se toma en cuenta aquí el «domicilio real» del pupilo, para nombrar al curador o tutor, porque éste todavia no existe i, por lo tanto, no ha absorbido el domicilio de aquel.

Inciso 2.º—Al decir «el mismo juez»... se ve claro que rató de evitar confusiones, pues, si hubiera dicho el juez del domicilio del pupilo no se habria sabido a que atener



tratándose de hechos posteriores al nombramiento i, en que, como hemos dicho, el pupilo pasa a tener el domicilio del tutor o curador. Siempre será el domicilio «real», quiere esto decir.

Esta medida tiende a dejar radicado un negocio en un tribunal determinado.

Escepcion a esta regla es el nombramiento de curador ad litem que lo hace el juez que conoce del negocio (art. 494 del Código Civil).

Art. 223.—Su último domicilio en Chile, según el art. 81 del Código Civil.

Art. 224.—Esta regla ya está dada en el art. 221 i se encuentra tambien, en las reglas del Código Civil sobre aperturas de sucesiones; pero, como se está hablando de curador, hizo bien en decirlo.

Art. 225.—Esto se refiere a todos los casos de incapaces.

Pero si se trata de la donación de un inmueble que valga mas de 2,000 pesos, se recurre al juez del lugar del domicilio del donante o donatario (212).

La razón de esta regla, que parece contrariar la del 225, ya que se trata de un inmueble, está en que se recurre a la justicia en este caso no considerando el inmueble sino considerando la donacion de 2,000 pesos.

Art. 226.—Si tuviere varios, donde tenga el asiento principal de sus negocios.

A todas estas reglas hai que agregar las especiales del Código de Procedimiento Civil en sus arts. 823 i 824 para los juicios de aguas i el 1076 respecto a la declaracion del goce de un censo o capellanía. Esta regla es mala, es un pleo-



nasmo, porque la redencion es la cancelacion del gravámen i esta cancelacion se hace en el Registro Conservador por una subinscripcion en la inscripcion. Cuando no está inscrito si que cabe la repeticion pleonástica.

Reglas que determinan la competencia en materias criminales entre tribunales de igual jerarquía

ART. 227.—Se funda en que ese tribunal tiene a la mano todos los medios necesarios para la investigacion del delito.

ART. 228.—Es una escepcion al art. 193.

EJEMPLO.—Entre dos individuos se comete un delito en Santiago i uno de ellos se va a Valparaiso donde comete otro delito i es aprehendido. Tendríamos que el juez de Valparaiso es competente para conocer del último delito i del de Santiago tambien; pero, como la causa es indivisible, tendrá que ir esta última a Valparaiso i tambien el otro reo. Además, es esto porque el juez necesita estar continuamente al habla con el reo lo que no podria hacerse si estuviera que estarlo pidiendo a cada instante al otro juez.

ART. 229.—Fundada en que la sociedad tiene más intereses en que se reprima el crimen que el simple delito.

ART. 230.—Por error de copia se omitió la palabra «falta» despues de «simples delitos». Además, este art. debe figurar respecto de los tribunales de diversa jerarquía.

Se llaman delitos conexos aquellos que están tan unidos que es difícil separarlos.—Arts. 6, 7, 8 del Código de Procedimiento Penal.



ART. 231.—Un caso de delitos en conexión. El art. 7 del Código de Procedimiento Penal modifica esta disposición para el caso—que aquí no se contempla—de conocerse en los dos o mas lugares a un tiempo. La Corte de Apelaciones respectiva debe designar al juez competente en tal caso.

ART. 232.—Este artículo, es deficiente, pues, en tanto no se presente el autor no hai Tribunal competente para dictar las medidas previas que deben preceder al arresto i sin las cuales toda pesquisa es ilusoria. I, precisamente, en este caso en que el criminal es mui posible (casi seguro...) que no venga a Chile, no hai tribunal competente para pedir la extradición. Esto está corregido en el art. 10 del Código de Procedimiento Penal que dice que «tratándose de delitos cometidos fuera del territorio i que deben juzgarse con arreglo a las leyes chilenas, serán competentes los jueces de Santiago».

ART. 233. Tratándose de un hecho no puede haber mas que un proceso... Para evitar conflictos que se produciría entre la jurisdicción militar i la civil se establece esta regla.

La lei no dijo nada respecto al civil que es coautor. Pero con mayor razon se aplicará este artículo. Así lo ha entendido la jurisprudencia i así lo establece el artículo 19 del Código de Procedimiento Penal.

ART. 234. Pero esta competencia del juez del crimen en materia civil es sólo para... «la mera restitución»... de alguna cosa que en virtud del crimen ha salido de donde estaba. Pero si alguien se presenta alegando dominio sobre la cosa, etc., cualquiera circunstancia que dé márgen a un



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

pleito civil, por pequeño que sea, hace perder su competencia al juez del crimen.

La indemnizacion de los daños i perjuicios no es de la competencia de los jueces del crimen; i en esto no hai contradiccion con lo que dispone el artículo 24 del Código Penal que sólo dice que la sentencia condenatoria *lleva envuelta la obligacion de pagar los daños i perjuicios*, obligacin facultativa para el interesado que podrá pedirla o no. Por ésto es absurdo lo que hacen algunos jueces del crimen que al final de las sentencias condenatorias agregan: «i deberá pagar ésto i esto otro lo demas acá i lo demas allá (!)»... El juez del crimen no tiene facultad para esto i así lo hacen ver las Cortes que confirman las sentencias sólo en cuanto a la condena.

Sobre esta materia hai dos corrientes en las actuales legislaciones: unas, la mayoría, que sostienen que como las indemnizaciones civiles emanadas de un delito es seguro que las persigue la víctima de él, debe ser competente para conocer de ellas el juez del crimen respectivo; la otra dice que no hai tal, como nuestro código. (Me gusta nuestro código). Así lo establece el Código de Procedimiento Penal en su artículo 24 que las deja a voluntad de las partes interesadas.

Pero hai ciertas cuestiones civiles, las prejudiciales, que pasaron inadvertidas a los ojos del legislador. *Cuestiones prejudiciales civiles* son aquellas de carácter civil tan íntimamente ligadas al acto criminal que su esclarecimiento es indispensable para establecer la inocencia o el grado de culpabilidad del reo o la existencia o inexistencia del delito.

Por ejemplo: un proceso por doble matrimonio en que el reo se escuepciona, alegando la nulidad del primer matrimo-



nio; en un robo el reo se escepciona alegando ser hermano del robado. ¿Qué juez es competente para conocer estas cuestiones prejudiciales? No lo dijo la lei de tribunales, pero dió la regla en el artículo 195- corroborado por el Código de Procedimiento Civil que dice que el juez que conoce de la accion conoce de la escepcion.

El artículo 20 i 21 del Código de Procedimiento Penal ponen en claro esta situacion. El artículo 20 en el inciso 1.º establece que corresponde al mismo juez del crimen conocer de estas cuestiones.

Dice así: «Si en el juicio criminal se suscita cuestion sobre un hecho de carácter civil que sea uno de los elementos que la lei penal estime para definir el delito que se persigue, o para agravar o disminuir la pena, o para no estimar culpable al autor, el juez del crimen se pronunciará sobre tal hecho».

En sus incisos 2.º i 3.º hace, sin embargo, escepcion de las cuestiones sobre validez del matrimonio, sobre cuentas fiscales, sobre calificacion de cuenta mercantil i sobre estado civil cuya resolucion debe servir de antecedente necesario para el fallo de la accion penal persecutoria de los delitos de usurpacion, ocultacion o supresion de estado civil, todas las cuales deberán ser resueltas previamente por el Tribunal a quien la lei ha sometido al conocimiento de ellas.

I el artículo 21 establece otro orden de escepciones al inciso 1.º del artículo anterior, se refiere a las escepciones de carácter civil que opongan a la accion penal, concerniente al «dominio» u «otro derecho real sobre inmuebles» en cuyo caso se suspenderá el juicio criminal en tanto se ven-



tilan en el Tribunal Civil. Mas para tal suspension es necesario que tales escepciones se presenten con plausible fundamento i que sean de tal naturaleza que al ser aceptados por la sentencia civil desaparezca el delito.

Este artículo 20 era el 17 del proyecto, redactado así: «Las cuestiones en materia civil cuya solucion sea indispensable, etc.», cosa mui vaga, sirviendo su historia para fijar el alcance de esta disposicion.

El artículo 23 del mismo tiene importancia para fijar estas ideas. Habla de la paralización del pleito criminal en estos casos, que no debe estenderse a aquellas diligencias del sumario necesarias para la comprobacion de los hechos.

El Código de Procedimiento Penal ha llenado todos los vacíos en esta materia en sus artículos 25 i 26.

El artículo 26 modifica en parte la disposicion del art. 25 del Código de Tribunales.

De la prórroga de la jurisdiccion

ART. 235. «Prórroga de jurisdiccion»... es el medio de otorgar, por voluntad de las partes, competencia a un Tribunal que naturalmente no la tiene para conocer de un asunto determinado. Relacionado con 240 i 241.

ART. 236. La prórroga de jurisdiccion sólo procede en los negocios contenciosos civiles, no en la jurisdiccion voluntaria porque en ésta interviene la justicia en razon de un interés público.

Como las partes tienen el derecho de prorrogar la jurisdiccion, el juez tiene la obligacion correlativa de aceptarla.



Segun este artículo no cabria prórroga en el caso de pedirse autorizacion para enajenar un bien raiz ni tampoco en materia criminal.

ART. 237. «Jurisdiccion análoga»... término demasiado vago i que hace mas oscuro el inciso 2.º.

La jurisprudencia de los Tribunales ha llegado a la conclusion de que la incompetencia por razon de la materia es insubsanable, lo mismo que la que procede del fuero de ciertos funcionarios i de la cuantía: en los primeros casos por existir un interes público i en el último porque los jueces inferiores fallan segun su leal saber i entender.

Es necesario, pues, que ámbos jueces sean del mismo órden i jerarquía, (artículos 235 del N. C. de T.), para que haya jurisdiccion análoga.

ART. 238. No es necesario, pues, que el mismo dueño del pleito sea el que prorrogue.

El artículo 8 del Código de Procedimiento Civil enumera los casos en que los mandatarios necesitan poder especial; no hallándose incluido el de prórroga de jurisdiccion, pueden hacerlo sin necesidad de éste.

ART. 239. En caso de demandarse al deudor principal i al fiador, ámbos deben aceptar la prórroga; si la acepta sólo uno debe ocurrirse al juez natural.

ART. 240. Ha de designarse con precision el juez de la prórroga. De suerte que si en un contrato digo yo: «me someto al juez de mi acreedor», no vale esta prórroga porque no designó juez precisamente.

ART. 241. Cuando la incompetencia de un juez puede ser salvada por la prórroga i el demandado tiene tal incompetencia entre sus escepciones dilatorias, debe ésta hacerla va-



ler en primer lugar porque en caso contrario se prorroga la jurisdicción.

Estos dos últimos artículos se relacionan con el 235. Trátese de la deficiencia de prórroga, el artículo 235 ha recibido de la jurisprudencia su verdadero sentido, pues, no hay prórroga por los actos de mera obediencia que no importan un sometimiento a la jurisdicción.

De la competencia para fallar en una sola instancia.

Art. 242. La «primera instancia» es el debate, prueba y fallo ante el Tribunal donde se interpuso la demanda; «segunda instancia» es el debate que tiene lugar ante el Tribunal Superior para revocar o enmendar la sentencia de primera.

Art. 243. Ya lo habíamos visto en el artículo 37.

Art. 245. Habría bastado con que al hablar de esas materias hubiese dicho la ley que se consideraban como más de 300 pesos para el efecto de apelación y no de 200 pesos como dijo.

Art. 246. También puede fijarse por el tribunal de 2.ª instancia.

De la implicancia y de la recusación de los jueces

Art. 247. La «implicancia» es una verdadera prohibición impuesta al juez por la ley y, por tanto, debe ser declarada de oficio. La «recusación» sólo puede alegarse por las partes. Una y otra están basadas en la imparcialidad que deben tener los jueces.

Esta materia ha cambiado radicalmente su modo de ser con



el Código de Procedimiento Civil que ha establecido que tanto las causales de impugnancia como las de recusacion, son verdaderas prohibiciones impuestas a los jueces (artículo 130), dejando como diferencia única que algunas causales pueden ser renunciadas por las partes i otras no.

Estas últimas son la de impugnancia. En este artículo 130 están comprendidas todas las del artículo 248 i muchas mas del 250. Todas las que quedan del artículo 250 sin enumerar en el 130 son las causales de recusacion (art. 285 i 287 del proyecto del C. O. de T.)

¿Qué se hace, entónces, cuando se recusa o implica un juez? Como las causales de impugnancia i recusacion sólo afectan a la persona del majistrado i no al tribunal, se subroga aquel conforme a las reglas de la subrogacion.

«En caso necesario»... es decir, cuando no está de manifiesto, como estaría, si el mismo juez demanda o es demandado.

ART. 251. A menos que la lei haya espresamente restringido el parentesco a los lejítimos e ilejítimos naturales, de afinidad o consaguinidad.

El proyecto de C. O. cambió la frase «confesion espontánea» por «confesion voluntaria», ya que así como está actualmente no puede ser pedida la confesion por las partes, (inciso último del art. 288 del proyecto).

De los tribunales que deben conocer en las cuestiones de competencia i en las de impugnancias i recusaciones

ART. 254. Esto es lo que toma el nombre de *contienda de competencia*... que son las cuestiones de competencia en-



tre las autoridades judiciales, no entre partes. Con cuestiones de competencia se entienden en jeneral todas las que se promueven por la competencia; pero en este caso particular deben llamarse «contiendas».

Cuando se produce la colision entre una autoridad judicial i una administrativa se llama «conflicto de jurisdiccion» i conoce de él el Consejo de Estado. Este párrafo se refiere a las contiendas entre autoridades judiciales.

El artículo 111 del Código de Procedimiento Civil ha venido a sustituir a éste, salvando la dificultad del inciso 4.º que así como está, puede dar lugar a otro conflicto. Establece que en este caso conocerá la Corte a que pertenece el Tribunal «requerido».

Corte respectiva de los jueces árbitros será la que corresponde al lugar don le debe cumplir el juez su cometido.

ART. 255. Se refiere a los tribunales especiales de que habla el art 5º

Antes se creía que estaban comprendidos en este artículo los jueces árbitros.

Inciso 2. Ha venido a sustituir el *recurso de fuerza*, suprimido por un convenio entre la Santa Sede i el Gobierno: La Santa Sede puso por condicion para aceptar esta lei que se aboliera el recurso de fuerza. Había recurso de fuerza en proceder, cuando violaba las leyes de procedimiento; recurso de fuerza en conocer i recurso de fuerza en no otorgar. Este es el recurso de fuerza en conocer. Entre esta disposicion i la antigua hai esta diferencia: ántes se le quitaban al Tribunal eclesiástico los papeles i se le procesaba; hoi nó porque sus decisiones sólo producen efectos espirituales. Sin embargo, que como hemos dicho ántes, hai penas espiri-



tuales que producen efectos civiles, como la indignidad que priva de las capellanías eclesiásticas.

ARTS. 256 i 257.—Igual al 130 del Código de Procedimiento Civil. No ha sufrido alteracion.

ART. 258.—Esto está íntimamente relacionado con los arts. 260 i 261.

ART. 259.—En los casos de este artículo conoce toda la Corte, segun el art. 66.

ARTS. 260 i 261.—Que se sustituyen por el 131 del Código de Procedimiento Civil. El art. 298 del Proyecto de C. O. lo sustituye tambien, pues, sustancialmente dispone lo mismo que el 131 del Código de Procedimiento Civil.

TITULO XIII

Del Ministerio Público

ART. 262.—*Ministerio Público* es una institucion legal que tiene por objeto cautelar el interes jeneral de la sociedad.

El art. 7 de la lei promulgatoria del Código de Procedimiento Civil (1552), de 28 de Agosto de 1902, modificó éste, diciendo que el Ministerio Público conoceria de asuntos administrativos cuando una lei «espresamente» requiriera su intervencion. Segun lo cual, el Fiscal de la Corte Suprema no está llamado a conocer en ningun caso i los de las Cortes de Apelaciones en tres: montepios, jubilaciones i pensiones remuneratorias del Estado (?).



En Francia se les llama Procuradores de la Nacion o Magistrados de pie, llamando sentados a los jueces; magistratura sentada.

ART. 263.—1.º No hai recursos de casacion en el fondo que se sigan ante las Cortes de Apelaciones. Así que el único Fiscal que conoce de éstos es el de la Corte Suprema. I tampoco éste, porque el Código de Procedimiento Civil ha venido a dar la manera de conocer de éstos recursos, estableciendo turnos entre los ministros para el efecto de la informacion, los que sustituyen así al fiscal, (art. 975, inc. 3.º del C. de P. C.)

En estos casos el interes social es evidente ya que los recursos de casacion miran principalmente a la recta aplicacion de la lei.

2.º Porque en estas no tiene interes la sociedad.

3.º i 6.º Interes social manifiesto.

5.º Análogas disposiciones tienen los arts. 27 i 34 de la Lei de Matrimonio Civil.

7.º—ARTS. 443, 1291 i (2036) del Código Civil; 1350, núm. 8.º, 1358, 1410 i 1530 del Código de Comercio. Los demas casos ya no deben tomarse en cuenta porque están sustituidos en el Código de Procedimiento Civil por el respectivo defensor público.

Tambien les corresponde cierta atribucion segun la lei de Municipalidades (art. 93, núm. 2.º).

ART. 264.—Naturalmente estos Tribunales no lo haran todas las veces sino cuando, a juicio de ellos, hai un interes público. El proyecto de C. O. ha establecido que sólo rejirá este artículo en caso de interes social.

ART. 265.—Como principal en todos los crímenes i



simples delitos que puedan pesquizarse de oficio; como ausiliar en el núm. 3.º i como tercero en el núm. 5.º. En el núm. 4.º tambien puede como ausiliar segun el caso.

En el núm. 6.º obra como parte principal cuando el Fisco no tenga por disposiciones especiales encomendada su defensa a otra persona. En el caso de que por la lei o disposicion especial tengã encargada su representacion a otra persona entra como tercero coadyuvante.

Los terceros son *coadyuvantes o escluyentes*. Los primeros son los que ayudan a la parte; los segundos los que la escluyen porque alegan un derecho propio.

ART. 270.—Por las leyes de 2 de Febrero de 1892 i 10 de Enero de 1895 tiene la Corte de Concepcion dos fiscales.

ART. 271.—En Santiago hai 3 i en Valparaiso hai 2.

ART. 273.—Ahora, no existiendo la lista anual, se referirá a un abogado que tenga las calidades exigidas por la lei. Lo mismo debe entenderse para los juzgados de letras.

ART. 274.—Se nombra un reemplazante en la misma forma que para los jueces. Para los casos urgentes, mientras se provee el puesto, se entiende que se aplica la regla del articulo anterior. Derogado por el art. 2.º de la lei de 19 de Enero del 89.

ART. 278.—Inc. 2.º—Este inciso ha sido derogado por el art. 3.º de la lei de 19 de Enero del 89 sobre nombramiento de jueces: «Derógase el inc. 2.º del art. 278 de la Lei Orgánica i se reemplaza por el siguiente:

«Para poder ser promotor fiscal de un departamento se requieren las mismas cualidades que para poder ser juez de letras del mismo».

Aunque a primera vista los dos incisos parecen ser igua-



les, hai innovacion considerable. Así no puede ser ahora promotor fiscal de un departamento asiento de Corte el que tiene cualidades para ser juez de letras de un simple departamento, o de un departamento donde reside la capital de provincia. Antes si que habia podido.

De la aplicación a los oficiales del Ministerio Público de varias disposiciones relativas a los jueces

ART. 280.—La *Lei de 5 de Enero de 1894* estableció que las funciones ahí enumeradas son incompatibles con todo otro cargo público, (art. 6.º)

ART. 285.—Despues vino la *lei de 26 de Setiembre de 1877*, en seguida la *de 5 de Enero del 94* que en su art. 3.º prohibe a todos los oficiales del Ministerio Público ejercer la profesion de abogado en aquellos negocios en que deben intervenir, pudiendo hacerlo en todos los demas. Esta misma lei prohibe a los promotores fiscales de Iquique, Pisagua i en lo civil de Santiago ejercer la profesion de abogado.

La *lei de 13 de Febrero de 1906*, que estableció una gratificacion especial para ciertos funcionarios judiciales, les impide a éstos ejercer la profesion de abogado.

¿Pueden ser árbitros? Evidente, ménos los fiscales de la Corte Suprema i de Apelaciones que lo tienen prohibido espresamente por la *lei de 11 de Enero de 1883*.

ART. 286.—Respecto a la implicancia i recusacion se equiparan a los jueces (arts. 118 i 130 del Código de Procedimiento Civil).



TITULO XIV

Del Ministerio de los Defensores Públicos

ART. 295.—*Defensores públicos*... son los funcionarios llamados a defender los intereses de los incapaces o personas que necesitan esta protección porque los suyos no están suficientemente resguardados por sí mismos.

Hai tambien audiencia de los defensores públicos como del ministerio público.

1.º Juicios.

2.º Actos no contenciosos.

ART. 296.—El Código de Procedimiento Civil en el art. 1024 completa éste. Se pone en el caso de un ausente que tiene apoderado, pero sin facultad de contestar una nueva demanda. En este caso i cuando se ignora el paradero del ausente, entra a representarlo el defensor público.

La facultad del defensor es activa i pasiva.

Para el honorario de éstos se dictó la *lei de 26 de Setiembre de 1877*.

ART. 298.—A lemas de aquella audiencia obligada hai esta facultativa para los jueces. Estos los oyen sólo cuando hai necesidad por la mala defensa de los intereses de los incapaces.

ART. 300.—En Santiago hai varios, en los departamentos uno.

El turno se fija por el dia de la primera providencia, aunque el negocio venga a terminarse mucho despues, para evitar injusticias de parte del juez que podria, al no ser así, esperar el defensor que mas le conviniera.



ART. 306.—Los dos últimos incisos los ha derogado la *lei de 19 de Enero de 1889*. Ésta derogó todo el art. 274 i sólo incisos en este. Este es un error que quizás a qué se debe. También debió derogar los dos primeros incisos, tal vez por olvido no lo hizo. Por este motivo no puede el juez hacer la designación en el caso del inc. 2.º de este artículo, como sí en el caso de los promotores fiscales.

ART. 307. Está modificado por esta misma *lei de 19 de Enero de 1889*.

Dice ésta que pueden ser de un departamento los que pueden ser jueces para ese mismo departamento, porque esta lei dividió en distintas categorías a los jueces según los departamentos. Conforme con el inciso 2.º del artículo 278.

ART. 308. Esta incompatibilidad es para con los jueces propietarios.

Por el texto de este artículo, parece que el defensor debería salir en caso de contraerse parentesco posterior, porque se habla de que «no pueden ser defensores», etc... Sin embargo, no es así: se procede como en el caso del artículo 170, reproducido por el 316.

ART. 314. Artículo 118 del C. de P. C.,

ART. 317. Artículo 293.—Pero sólo pueden ser recusados ámbos cuando obran como terceros coadyuvantes. No en los otros casos porque son partes i éstas no pueden ser recusadas.



TITULO XV

De los Relatores

ART. 319. A pesar de ser mui tonta está disposicion, no ha habido lei alguna que la modifique, entendiéndose, por tanto, que bastá el mínimum de las condiciones para ser jueces de letras.

Segun el artículo 4.º de la lei de 8 de Enero de 1894 el cargo de relator es incompatible con el ejercicio de la profesion de abogado.

ART. 321. Modificado por el artículo 1.º, inciso 4.º de la *lei de 2 de Febrero de 1892*, sobre creacion de la Corte de Valparaíso i organizacion de la de Santiago.

ART. 323. Ahora los relatores se subrogan unos a otros.

ART. 324. El secretario sólo subroga al relator para dar cuenta. Pudiera creerse que el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil no hace distincion, pero no es así; es sólo para este caso.

ART. 325. 2. De todas las demas da cuenta el secretario en la pública.

4.—«Informes en derecho»... son informes que hacen los abogados con permiso del tribunal para estudiar las cuestiones difíciles de derecho. (artículos 452, 453 i 454 del Código de Procedimiento Civil).

5.—Para que cuando vuelva la causa se sepa quiénes deben entrar en el acuerdo. En estos dos últimos casos los relatores son ministros de fé.



ART. 327. Artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 329. Modificado por *lei de 8 de Enero de 1894* que en su artículo 4.º dispone que es incompatible con la profesion de abogado.

No se prohíbe a los relatores manifestar opinion en el negocio.

TITULO XVI

De los Secretarios

ART. 340. No tiene aplicacion.

ART. 344. Artículo 61 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 346. Hai un auto de la Corte Suprema de *20 de Diciembre de 1855*, que establece que el secretario debe autorizar la primera providencia con la calidad del juez que la suscribe, lo mismo que cada vez que cambie la persona del juez.

Por dos motivos puede ir al archivo un espediente: por concluído i por retardo de un año.

Tambien corresponde a los secretarios otra funcion: la del art. 516 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 347. La lei última de licencias (1041) de *24 de Junio de 1898* concede hasta ocho dias de licencia a los empleados rentados.

ART. 349.—La regla es que no tengan sueldo. Algunos lo tienen i siempre los que sirven juzgados del crimen.



ART. 351.—Particularidad es esta de recusarlos sin expresar causa, (art. 118 del Código de Procedimiento Civil, inciso final).

¿Podrían en caso de ser varios los demandados, recusar dos cada uno? El art. 133 del C. de Procedimiento Civil da la regla para este caso, al decir; *«Cuindo fueren varios los demandantes o demandados, la implicancia o recusacion deducida por alguno de ellos no podrá renovarse por los otros a ménos de fundarse en alguna causa personal del recurrente.»*

TÍTULO XVII

De los receptores

ART. 352.—Los receptores son funcionarios que notifican a las partes en todos los demas casos en que no lo hace el secretario segun el art. 346 núm. 2.º

En la oficina misma del secretario no podrian notificar salvo encargo especial del juez.

Dilijencias judiciales que por la lei no estan encomendadas a otros funcionarios.

ART. 353.—El límite de sus funciones es el departamento i la subelegacion respectivamente, de unos i otros.

No estan bajo un tribunal especial: son receptores de mayor cuantía los que sirven para todos los asuntos del departamento i de menor para los de subelegacion.

El decreto de 22 de Febrero de 1876 en su art. 3.º, estableció que los juzgados de apelaciones se servirían del receptor de mayor cuantía para sus asuntos.

ART. 355.—En Santiago hacen el nombramiento de los



receptores de mayor cuantía los jueces de apelacion. Sin embargo, no hai ninguna lei que les confiera esta atribucion i el Presidente de la República no ha podido dárselas tampoco.

ART. 356.—Así es que pueden no saber leer ni escribir, segun este artículo.

ART. 358.—Los de mayor cuantía tambien prestan fianza por la cantidad que el Presidente de la República fije.

ART. 359--3.—Para este efecto se turnan los receptores mensualmente; turno que fija el presidente de la Corte de Apelaciones, donde la hai; el juez de letras en los demas lugares.

ART. 360.—Son recusables como los secretarios. Es incompatible con el cargo de receptor la profesion de abogado (art. 348).

INC. 2.º—Los jueces de letras respectivos son los civiles porque son los únicos jueces de letras jenerales: los otros son especiales, tanto los criminales como los de apelacion. El juez civil tiene todas las facultades ménos las que se le han segregado como son las que pertenecen a los otros citados. Donde hai varios jueces civiles es repectivo el de turno.

Al hablar la lei de los relatores y secretarios, estableció la manera como se subrogan estos funcionarios en caso de recusacion. De modo que si en un lugar hai dos receptores i los dos son recusados por las partes, o cuatro i cada parte recusa dos, como la lei no se ha puesto en este caso, no hai subrogacion. En este caso se encomiendan las delijencias a los jueces de subelegacion i de distrito (arts. 31 i 36).



TÍTULO XVIII

De los Notarios

ART. 361.—Estos instrumentos son las escrituras públicas.

Las funciones de los notarios son: autorizar las escrituras públicas, es decir, los instrumentos públicos que se otorgan en su protocolo.

En el Tít. XIX de la Part. 3^a. i en en el Tít. XV, libro VII de la Novísima Recopilacion se encuentra la forma como los notarios deben desempeñar sus funeiones, como deben otorgarse los instrumentos públicos, etc. Ademas, les corresponden otras funciones desde que se han separado las funciones de secretarios i notarios, ántes unas mismas. El decreto de *3 de Setiembre del 66* dijo que para intervenir en la apertura de un testamento cerrado nadie era mas competente que el notario que había actuado en su otorgamiento, debiendo el juez actuar en la apertura con este notario aunque estuvieran separadas las funciones de notario i secretario.

Esta disposicion está derogada por la lei de Tribunales, que fijó el funcionario que debía intervenir en este caso (secretario). El art. 1,025 del Código Civil dice que debe comparecer el notario, pero sólo para reconocer su firma i declarar que el sobre está lacrado i sellado como él lo dejó. Sin embargo, con todo, ésto es dudoso i hai distintos criterios sobre quién debe intervenir.

Con posterioridad a la lei de Tribunales i al Código Civil viene el C. de P. C. que en su art. 1,046 no logra salvar



esta dificultad, pues que sólo se refiere al artículo 1,025 del Código Civil, que es el oscuro.

El mismo decreto dice en su artículo 3.º que en facción de inventarios solemnes, el notario también es el único competente. El Código de Procedimiento Civil en su artículo 1,037 también lo establece claramente, debiendo protocolizarse aun cuando intervengan los otros funcionarios.

También establece que son competentes para actuar en los juicios de compromiso. Sobre esto ha habido resolución de los Tribunales que establecen que en estos casos puede actuar cualquier ministro de fé, resolución confirmada en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil.

En los juicios de partición establece el art. 804 del mismo Código que sólo pueden actuar los secretarios de los juzgados i los notarios.

Hai otros funcionarios que pueden hacer las veces de notarios: los oficiales del Registro Civil en los distritos rurales en los casos del artículo 15 de la Ley del Registro Civil.

ART. 362. Según decreto de *29 de Mayo del 63* en todos los departamentos en que haya mas de un notario debe haber uno de hacienda que entre otras cosas debe recibir las fianzas de los empleados públicos. Este es nombrado por el Presidente de la República. Los otros decretos que se relacionan con ellos son: *15 de Marzo del 87* i *21 de Diciembre del 88*.

ART. 365. En todo caso debe hacerse el remplazo porque de todos modos se perjudica el servicio público.

ART. 367. No es exacto esto. Sólo debió reproducir este artículo los números 1 i 2 del artículo 347, porque los no-



tarios no están autorizados para cerrar sus oficinas en días feriados.

TITULO XIX

De los Conservadores

ART. 371. Hai, ademas, el Conservador de Minas. El decreto de *24 de Febrero del 75* modificó este artículo 371 i dijo que donde hubiera mas de un notario, el Presidente de la República designaría uno para que fuera de minas.

El Conservador de Minas se rige por el art. 82 del Código de Minería. Este debe llevar los tres registros, que se rigen lo mismo que los de bienes raíces.

TITULO XX

De los Archiveros

ART. 378. La *lei de 25 de Octubre del 77* dijo que los archiveros jenerales podrán dar, sin decreto judicial, copia autorizada de las escrituras contenidas en los protocolos de su archivo en todos los casos en que los notarios que hubieran intervenido en su otorgamiento hubieran podido darla.

La lei no habla de recusacion de éstos como tampoco de los notarios i sí sólo de implicancia. Esto por la naturaleza de sus funciones, desde que es facultativo para las partes ocurrir a uno u otro.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

ART. 384.—I—«Procesos afinados»... los que están definitivamente concluidos.

2.—Disposicion que guarda conformidad i está esplicada por el artículo 800 del Código de Procedimiento Civil.

5—¿I el índice? Queda en la oficina del Conservador. Esto es un absurdo. Por esto la Corte se ha hecho aquí dsentendida, quedando todos en poder de los conservadores. Esto es lógico. ¿Qué se sacaría con tener los libros en una parte i el índice en otro? Para tener que andar de aquí para allá como la hamaca. Sin embargo, en otros departamentos se cumple a la pata es artículo.

TITULO XXI

De los Procuradores

ART. 389. Se llaman del número porque hai un número fijo de ellos.

ART. 391.—25 años. El procurador es un mandatario i el Código Civil dice que puede constituirse un mandato en un mandatario menor de edad (art. 2128).

ART 394. Ademas, se rijen por el Título II del Libro I del Código de Procedimiento Civil.

ART. 395. Por el artículo 15 de la Lei del Registro Civil se faculta a los oficiales del Registro Civil que tengan su asiento fuera de las ciudades para otorgar estos poderes.

El artículo 395 ha derogado el artículo 45 de la *lei de 15 de Octubre del 56* que permitia otorgar poder para juicios



de ménos de 1,000 pesos por medio de un escrito dirigido al juez i firmado por un ministro de fé distinto del secretario.

El Código de Procedimiento Civil ha ampliado este artículo 395 en el núm. 2 de su artículo 7, estendiéndose el mandato no sólo al Tribunal de la causa en que se dió sino para cualquier otro.

Hai, además, formas especiales de nombrar mandatarios: la del art. 14 del Código de Procedimiento Civil i la última regla del 136 del mismo.

ART. 396. 1—Está sancionada con multa la falta de cumplimiento de esta obligacion. Es tan importante esta asistencia que en Santiago se ha puesto registro donde deben firmar los procuradores a fin de cerciorarse de si van o no.

Además, tienen la obligacion de asistir a la pública, segun auto acordado de la Corte Suprema de 27 de Febrero de 1861.

ART. 400. Recien se dictó el Código de Procedimiento Civil la Corte Suprema, interpretando mal los artículos 5.º i 8.º de este Código, dijo que el presente quedaba derogado por aquellos en el sentido de que no se necesitaba de procurador del número para litigar ante las Cortes de Apelaciones o Suprema. Tanta alarma produjo esta declaración que, a fin de evitar se formara jurisprudencia, se dictó inmediatamente la *lei* núm. 1676, de 1.º de Setiembre 1904, que refuerza i aun amplía este artículo, pues, agrega que en caso de ser declarado rebelde el litigante no puede presentarse ni por sí sino por procurador del número ante estos Tribu-



TITULO XXII

De los Abogados

ART. 402.—3—Se entiende por pena corporal cualquier pena aplicada a la persona misma del penado. Aunque el Código Penal no las define, sin embargo, se colije de los artículos 152 i 154 que contraponen pena corporal a pena pecuniaria.

Lo que quizo decir esta lei es pena aflictiva i no corporal. Sin embargo, asi se ha entendido en la práctica una vez, como lo dice el artículo. Una persona que por una insignificante falta ha sido arrestado un dia no puede ser abogado.

FIN

